

LA "SEGUNDA FASE" DE LA "REVOLUCION PERUANA "

Y LA LUCHA DE CLASES

anibal quijano

LA CRISIS Y LA POLITICA ECONOMICA

DEL CAPITAL

felipe portocarrero

EL SUTEP Y LA POLITICA EDUCATIVA DEL

REGIMEN

SOCIEDAD Y POLITICA 5



SOCIEDAD Y POLÍTICA

AÑO 2
DIRECCION:

No. 5-Noviembre 1975 - LIMA - PERU
Aníbal Quijano

INDICE

EDITORIAL		Pág. 1
<hr/>		
PERU		
La "Segunda Fase de la Revolución Peruana" y la lucha de clases.	Aníbal Quijano	Pág. 4
La Crisis y la Política Económica del Capital	Felipe Portocarrero	Pág. 20
<hr/>		
LAS LUCHAS SECTORIALES EISUTEP y la Política Educativa del Régimen		Pág. 28

Impreso: Italperú
Av. La Marina 2274 San Miguel

La responsabilidad por el contenido de los artículos corresponde a sus autores. La Revista sólo es responsable por las notas Editoriales. Toda colaboración que se envíe a la Revista será bienvenida, pero no se mantendrá correspondencia sobre colaboraciones no solicitadas debido a la limitación de nuestros recursos.

EDITORIAL

NUESTRAS TAREAS

La masiva resistencia del proletariado y de los demás explotados, determinó, en lo fundamental, el descabezamiento de la tendencia fascista en el régimen militar. Pero eso fue posible porque en ese momento estaba en riesgo la unidad del frente capitalista.

Después del golpe de agosto, ese frente está reorganizándose activamente, para una nueva fase de ofensiva contra los trabajadores. Los capitalistas quieren que aquellos paguen los costos de la crisis económica y, al mismo tiempo, de la consolidación del "modelo peruano" de explotación. Es decir, que los trabajadores se sometan a la reducción del salario y del empleo y, además, que laboren disciplinadamente aumentando la productividad y la producción. O sea, que se sometan a una sobre-explotación.

La ofensiva patronal se ha intensificado, mientras el régimen militar trata de castrar a los trabajadores, combinando las prédicas de conciliación de clases con ruidas amenazas de represión y de imposición autoritaria y violenta del corporativismo. Pero no le será fácil a los capitalistas lograr sus propósitos.

El proletariado está ya movilizado. Ha madurado algo más su conciencia y ha ganado en experiencia de lucha organizada. El surgimiento de importantes núcleos que, dentro de la clase, avanzan en una dirección socialista revolucionaria y ya con alguna organización de base, muestra que ha entrado en una nueva dinámica, ideológica y orgánicamente.

Esa dinámica consiste en la formación de las bases de un movimiento socialista revolucionario en el seno mismo del proletariado, y en la formación de los primeros núcleos políticamente organizados de ese movimiento.

Sin embargo, es necesario reconocer que ese proceso abarca aún a una parte minoritaria del proletariado. Y que, además, la mayor parte de los que se incorporan a ese movimiento, no tiene aún una conciencia política muy definida, ni está políticamente organizada. Más todavía, que el sector organizado está dividido en grupos divergentes.

No hay nada sorprendente ni anómalo en esta situación del proletariado, ni del movimiento socialista revolucionario que se va constituyendo en su seno. Largos decenios de dominio político de las capas medias populistas y posteriormente de grupos burocráticos y reformistas de la propia clase, explican estos hechos sin dificultad.

El problema es que en esa todavía lenta y dificultosa maduración política del proletariado, se asientan las posibilidades de la pretensión manipuladora del régimen, favorecidas por las ilusiones y los sectarismos de los primeros contingentes de revolucionarios que van incorporándose, muchos desde las capas medias, a las luchas del proletariado. Estos últimos, ciertamente difundiendo ideas socialistas y tomando parte activa en las luchas concretas, pero también acarreado elementos de confusión a la nueva conciencia política de la clase.

Dos cuestiones centrales se plantean, por eso, para el desarrollo del movimiento socialista revolucionario:

a) Cómo avanzar en la clarificación, depuración e integración coherente de la conciencia política de los núcleos avanzados de la clase, que les posibilite no solamente afirmarse en una dirección revolucionaria, sino también ampliar sus bases dentro de la clase, e influir en la dirección de otros sectores de trabajadores explotados.

b) Cómo avanzar hacia la organización y unificación política de quienes, desde dentro o desde fuera del propio proletariado, van incorporándose a la constitución de las primeras puntas del movimiento socialista revolucionario.

Uno y otro problema se condicionan dialécticamente. Respecto del primero, es imperativo, en primer lugar, aprender a despojarse de las ilusiones y distorsiones que, en la formación de nuestra conciencia, provienen del pasado dominio y de la actual influencia de la burguesía y de las capas medias populistas. En segundo lugar, para lograr lo anterior, aprender a traducir en conciencia política concreta, la cotidiana experiencia de lucha del proletariado, en sus varios niveles.

El terreno de las luchas de clases en el país, está en activo proceso de depuración, por la

ampliación y reajuste de las bases de la acumulación capitalista, dentro de cuyo curso las relaciones de producción de origen precapitalista van quedando como bolsones, pero ya sin atravesar como antes la entera estructura de la sociedad. Sin embargo, más de cincuenta años de dominio de la ideología populista y burocrático-reformista entre el proletariado y entre las capas medias que se acercan a él, nos han condicionado para no reconocer con nitidez estos hechos.

Así, mientras que el proletariado y la vasta mayoría de los otros trabajadores explotados, se enfrentan diariamente al capital en todos los terrenos, todavía una parte bastante amplia del proletariado y las capas medias que se unen a éste, sigue creyendo y sosteniendo que nos estamos enfrentando a un enemigo básicamente semi-feudal.

Mientras que el proletariado y el semi-proletariado forman la amplia mayoría de los trabajadores, y en consecuencia los problemas de las alianzas de clases se replantean en sus bases y en sus contenidos concretos, las reivindicaciones y las luchas de ambos sectores se orientan en la práctica por separado.

Mientras que los mecanismos de la explotación capitalista se modifican y se renuevan a prisa, removiendo las bases del viejo capitalismo de "enclave" y afirmando el dominio del nuevo capital monopolista internacional, cuya estructura es casi enteramente distinta que en períodos anteriores, bajo la palabra imperialismo todavía seguimos aludiendo a las ya obsoletas formas de dominación del viejo capital imperialista.

Mientras que el carácter monopólico de los núcleos hegemónicos de la burguesía privada nativa se acentúa, arrastrándola a una más profunda integración dependiente con la burguesía monopolista internacional, y despojando a esa clase en el Perú de toda posibilidad vital de interés nacionalista, todavía se sigue predicando un nacionalismo como componente significativo de la conducta política de esa clase y del Estado en cuyo dominio participa. Mientras que todo indica, cifra por cifra, la solidaridad esencial e inescapable entre el capital estatal y el nuevo capital monopolista internacional, que dominan, a pesar de sus diferencias, sobre las nuevas bases del capitalismo en el país, aún se cree ver en la formación del capital estatal y en la política del régimen que construye esa asociación, una vía antimperialista.

Mientras que inclusive los propios grupos de la tecnoburocracia, militar y civil, que inconscientemente expresan las aspiraciones nacionalistas de una parte de las capas medias, son obligados inevitablemente a defender esa solidaridad esencial del capital estatal con el monopolista internacional, porque de eso depende la formación y afirmación del capital estatal, y de ese modo diluyen en esa alianza su inconsecuente nacionalismo, todavía se mantienen las ilusiones en la potencialidad antimperialista de esos grupos.

Cuando es cada día más clara y ruda la entraña corporativa de la ideología y la práctica de la "democracia social de participación plena", aún no se disipan las ilusiones en las pretendidas virtudes de esas secreciones políticas del capital estatal, y hasta se planteó la unidad sindical con los aparatos corporativos.

De todas esas formas, se contribuye en la práctica, a pesar de las intenciones, a alimentar el confusionalismo manipulador del régimen, y no se ayuda al proletariado a reconocer el enemigo contenido de clase de algunas medidas parciales de un régimen que, todavía, requiere terminar de remover los escombros oligárquicos y los del viejo imperialismo de "enclave", así como llevar a la burguesía privada nativa a articularse al dominio del capital estatal asociado al capital monopólico internacional.

Existe, pues, un bache aún muy amplio entre la experiencia concreta de las luchas de clases, y la conciencia política concreta de la mayoría del proletariado, inclusive en los propios núcleos que avanzan hacia la formación de un movimiento socialista revolucionario de la clase. En eso se funda la perduración de consignas que podían haber tenido vigencia en el pasado, pero que hoy sólo pueden llevar a los trabajadores a ser políticamente prisioneros de las nuevas exigencias del capital.

Ese bache no se puede llenar, ni aún realmente reducir, solamente a través de una prédica general sobre el socialismo, porque su utilidad se agota en la ideologización abstracta de una minoría del proletariado. Mientras se mantiene la objetiva distancia e inconexión entre la lucha reivindicativa de todos los días, y las necesidades de la lucha política contra el dominio del capital en el Perú.

Es ahora urgente despojarse de esas ilusiones y distorsiones en nuestra conciencia. El camino metodológico, es hacer el esfuerzo de descubrir en la marcha concreta de la realidad, cómo se ordenan y cambian los contenidos concretos del interés de los capitalistas y, en la misma dialéctica, los de los trabajadores explotados, y cómo cambian y se mueven sus formas concretas de lucha.

La teoría marxista general es —siempre fue— una guía para ese trabajo. Pero no contiene apriori la realidad concreta y cambiante de cada contexto y de cada momento. Es útil, de otro lado, inclusive indispensable, aprender de la experiencia de otros contextos y épocas. Pero es dañino ver la realidad propia sólo con la perspectiva de lo sucedido en otras partes, por mucha que sea nuestra admiración por sus luchas y por sus ilustres dirigentes.

En otras palabras, el esfuerzo consiste en traducir, a la luz del marxismo revolucionario, la experiencia concreta, en sus varios niveles, en conciencia política concreta. Eso es lo que, en la práctica, podrá realmente ayudarnos a ampliar más, y más pronto, las bases del movimiento socialista revolucionario en el proletariado.

Es ese mismo camino que hay que seguir, para enfrentar el problema de la organización y unificación política de los núcleos que, desde dentro y desde fuera del proletariado, confluyen en la formación de ese movimiento.

Todavía hoy, estamos ocupados en reproducir modelos de organización probados en otras experiencias revolucionarias, o producidos en experiencias autónomas pero parciales. Y es aún débil nuestro esfuerzo por extraer de la práctica concreta del proletariado y de los otros trabajadores explotados, las líneas que van surgiendo en la dinámica organizativa de sus luchas. Pero es descubriendo en esa dinámica concreta, cuáles son las tendencias y elementos que contienen vitalmente los intereses del proletariado en el largo plazo, como podríamos acercarnos a un modo eficaz de planteamiento de los problemas de la organización política de los trabajadores del Perú, aquí y ahora.

En esa dinámica actual, hay tendencias y elementos que provienen del pasado y otros resultan de la práctica presente. Es necesario tratar de descubrir cómo se encabalgan, compiten o se refuerzan mutuamente. Y es necesario aprender a ver, participando en las luchas concretas, cuáles de esos elementos merecen ser alimentados, aún si están apenas en embrión; cuáles requieren ser fortalecidos y sistematizados en contra de otros, o utilizados para dar paso al avance de las prácticas y modos que pueden realmente encauzar los intereses históricos de la clase.

Hoy día, en el surgimiento de las primeras bases del movimiento socialista revolucionario del proletariado, son ya observables algunos elementos que serán decisivos. La lucha de las bases contra el mangoneo y el burocratismo, sindical y/o político, y la resistencia contra el sectarismo son, quizás, los más inmediatamente visibles.

Sin embargo, más importante a largo plazo, porque de ello dependerá en gran parte la erradicación de esos vicios, es la lucha por construir en el seno mismo de la clase, y a través de sus luchas, las bases de la organización y unificación política del movimiento socialista revolucionario, contra la todavía extendida práctica de construir aparatos en el seno de grupos de capas medias, que luego reclutan trabajadores para incorporarlos a esos aparatos, a partir de lo cual los intereses de grupo pasan por ser el interés de la clase.

En la construcción de los núcleos de base de la organización política, interna y autónoma, del proletariado, está planteado también el problema de la construcción de las futuras bases del poder político de los trabajadores, si lo que se busca no es solamente —bajo los términos de conquista del poder— una suerte de copamiento burocrático de este Estado (el actual), por una nueva burocracia "revolucionaria", que luego imponga su dominio sobre las masas en nombre del socialismo.

Todos estos problemas requieren ser ahora urgentemente investigados y debatidos a fondo, pero desde dentro de un compromiso practicante con las luchas diarias de los trabajadores, contra la reducción del empleo y del salario, contra el decapitamiento de las dirigencias clasistas del movimiento sindical, contra la intensificación del esfuerzo productivo bajo esas condiciones, contra la imposición de la ideología y la práctica del corporativismo, fascista o no.

Ninguno de nosotros, en la izquierda peruana, puede alegar que está libre de todas estas deficiencias, ilusiones y distorsiones. Todos somos, en medidas diversas, producto de una común historia y no somos inmunes a sus estragos, así como no somos ajenos a sus luchas. El esfuerzo nos abarca y nos obliga a todos.

Es necesario decir, además, que es posible observar un claro avance en este sentido, en la generalidad de las corrientes y agrupaciones que van confluyendo en la construcción del movimiento socialista revolucionario del proletariado. Las diferencias son aún muy profundas. Pero también, aunque gradual y dificultosamente, están apareciendo los elementos de una común perspectiva revolucionaria sobre los problemas centrales. Existen, pues, las bases para un más rápido desarrollo en esa dirección.

Sociedad y Política vuelve a sumarse a estas tareas, al lado de todos los otros revolucionarios peruanos, en la ruta de una común alternativa. ■

Aníbal Quijano

La "segunda fase" de la "Revolución Peruana" y la lucha de clases

El 29 de agosto, el país fue informado de un golpe de las guarniciones militares, para derrocar a Velasco. Junto con éste, fueron obligados a dejar el gobierno los más conspicuos miembros de su camarilla. Unos al retiro y otros a importantes puestos de mando en el Ejército.

Los nuevos dirigentes del régimen militar, aseguran que no se trata sino de un relevo. Han indicado también, sin embargo, que se proponen corregir desviaciones personalistas en la conducción del gobierno y modificar los métodos de relación política con las masas. Es decir, a fin de cuentas, no se trata de un simple relevo.

En realidad, esos cambios suponen toda una recomposición política del régimen militar y de todo el frente capitalista. O sea, un reajuste en la correlación de fuerzas entre las principales fracciones de la burguesía y de sus agentes tecnocráticos, militares y civiles, en el control del poder. Sus diferenciaciones y conflictos se agudizaron en el último año, bajo los impactos de la crisis económica y frente a la masiva resistencia de los trabajadores contra la política del "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada" y del conjunto del frente capitalista.

Se abre así un nuevo período de reajustes y desplazamientos en el frente capitalista y de disputas por la hegemonía dentro del régimen militar. Sus alternativas serán condicionadas por el comportamiento de la crisis económica y por el nivel que alcance la lucha de los trabajadores.

Indagar en las bases de esos cambios y sobre las alternativas de las luchas de clases en el país, es el propósito principal de este artículo. ★

★ Este artículo fue escrito antes de los recientes cambios en los mandos de la Aviación y del Ejército. Estos hechos no alteran significativamente nuestro análisis, y serán materia de posteriores trabajos.

LA DEPURACION DE LAS BASES SOCIALES DEL ESTADO Y LAS CONTRADICCIONES DEL REGIMEN MILITAR.

desde fines del año 72, tres elementos principales emergían dominando el proceso desencadenado por este régimen:

1) A través del establecimiento de las bases del nuevo modelo de explotación capitalista, iba culminando la erradicación de las bases materiales y políticas del poder de la fracción oligárquica de la burguesía en el Estado. Es decir, de la gran burguesía terrateniente, asociada al capital imperialista de "enclave". Se depuraba, así, el contenido concreto de clase del Estado, sobre la base de la asociación de intereses entre el capital estatal en formación y el capital monopolista internacional, principalmente, y con el capital monopolista dependiente, o nativo, secundariamente. Eso significaba, también, la depuración del contenido concreto de las luchas de clases de los trabajadores, por la eliminación del componente antioligárquico que cubría parcialmente, la lucha contra el capital, ahora desprovisto de esa vestidura.

2) Como consecuencia objetivamente necesaria de la emergencia del capital estatal como el eje central de articulación de los intereses capitalistas, el régimen militar estaba organizando diversos aparatos de control sobre los trabajadores, como las bases para el establecimiento de un sistema de integración corporativa de las masas bajo el control del Estado, en reemplazo del orden oligárquico desintegrado.

3) Con esos condicionamientos fundamentales, pero empujadas también por el deterioro de su nivel de vida, precio de la imposición de este "modelo peruano" de explotación, capas crecientes del proletariado y de otros sectores de explotados, se incorporaban gradualmente a la lucha contra estas nuevas formas de explotación económica y de dominación política. La movilización contra el alza del costo de vida y por la defensa de la autonomía de clase de sus organizaciones, se convertían en las consignas centrales de los trabajadores.

Por todo aquello, como lo señalábamos en el No. 4

de esta revista (1), el sueño reaccionario de la conciliación de clases, se estrellaba cada día más contra esa realidad. Y los representantes tecnocráticos y utopistas de las capas medias, por la bancarrota política de la propia burguesía, cumplían con su propio ambivalente y contradictorio estilo, y aún a contrapelo de su falsa conciencia de la realidad, las exigencias objetivas de los intereses del capital en esta nueva etapa, y se enfrentaban a los trabajadores de modo cada vez más rudamente represivo.

Sin duda, no obstante, esos grupos tecnocráticos, ahora autoridad política intermediaria entre el gran capital y los trabajadores, comenzaban a ser tironeados entre las diversas opciones concretas, derivadas de la contradictoria dinámica de los intereses que se articulan en el "modelo peruano", y que se representaban en los varios matices de la confusa amalgama ideológica que impregnaba la prédica y la obra del régimen.

Fluctuando aún, muchos de ellos, entre esas opciones, los miembros del gobierno y de las FFAA comenzaban, ya en esa etapa, a diferenciarse a lo largo de dos corrientes principales. Una básicamente tecnocrático-desarrollista y otra llamable tecnocrático-nacionalista, en la medida en que su ideología era matizada por ciertos elementos de inconsecuente nacionalismo.

La primera traducía más definitivamente los intereses del gran capital, tanto estatal como privado, y se orientaba consecuentemente a una articulación subordinada del capital estatal con el capital monopolístico internacional, con un lugar importante del capital monopolístico nativo dentro de esa asociación. Y, de otro lado, a una mayor represión contra los trabajadores.

La segunda se fundaba ante todo en el interés del capital estatal, apoyando también su asociación con el capital monopolístico internacional, pero tratando de obtener una mayor capacidad de regateo de la plusvalía en favor del primero, y un más claro dominio de éste sobre el capital monopolístico nativo. En eso consistía y se agotaba su nacionalismo. Y frente a los trabajadores, se orientaba a mantener, sin perjuicio de la represión selectiva los mecanismos estructurales y la prédica necesarios para la conciliación de clases, como base del corporativismo.

Así, esa corriente tecnocrático-nacionalista, expresaba ciertamente los intereses del gran capital, pero, aunque con su propia manera castrante y tecnocrática, expresaba también las expectativas democrático-nacionalistas de algunas capas medias asalariadas, de intelectuales, profesionales y técnicos, dentro y fuera de la administración estatal, con el apoyo de las cúpulas reformistas y burocráticas del movimiento obrero, en particular de la CGTP.

Entre ambas corrientes se compartía, sin embargo, un terreno de interés común: el capital estatal, cuyas implicaciones sobre la dinámica del régimen asumían ambas, tanto en la política económica como en la conducta frente a las masas. En el primer aspecto, eso suponía ante todo el mantenimiento de la esencial solidaridad con el capital monopolista internacional. En el segundo, la necesidad de la integración corporativa de los trabajadores bajo el control del Estado. Pero esos problemas tenían que ser asumidos de modo relati-

vamente diferentes, por cada una de las corrientes.

Para la tecnocracia desarrollista, la asociación del capital estatal con el privado monopolista, con un lugar importante aunque menor del capital monopolístico nativo, implicaba que la distribución de los recursos financieros y político-administrativos permita no solamente el crecimiento del capital estatal sino también del privado. Lo que dada la escasez de recursos se traducía en presiones para hacer más moderado el ritmo de crecimiento del primero. Y eso, choca con las necesidades del capital estatal, que en una estructura capitalista subdesarrollada y dependiente, constituye la necesaria aunque impotente alternativa del capital para enfrentarse a sus contradicciones.

De otro lado, en la medida en que el capital estatal se convierte en el eje central de articulación del capital en su conjunto, el control corporativo de los trabajadores es una necesidad política imperiosa. El régimen militar, por su carácter tecnocrático y por la fuerte presencia política del utopismo voluntarista de algunos de sus grupos en los primeros años, estableció la comunidad laboral y la "propiedad social", como mecanismos de conciliación de clases que hicieran menos indispensable la imposición represiva y violenta del corporativismo. La conciliación se reveló imposible, pero sus mecanismos perturbaban el funcionamiento del capital sin resolver sus problemas. Para la burguesía privada, pues, esas instituciones no eran aceptables a menos que se castrara políticamente a los trabajadores o se los sometiera por la represión. Lo uno y lo otro eran resistidos sin tregua por aquellos. La tecnocracia desarrollista estaba atrapada entre la defensa de las bases políticas del modelo y las presiones de los socios del capital estatal.

Para las corrientes inconsecuentemente nacionalistas, a su vez, la pretensión de afirmar la capacidad del capital estatal para regatear la distribución de plusvalía, exigía conquistar el apoyo de amplios sectores de trabajadores a la política de conciliación de clases. En ese sentido, la prédica y los mecanismos establecidos para ello tenían que ser mantenidos, además tenía que evitarse porque eso reducía las bases de ese pretendido apoyo político.

El problema era, sin embargo, que la resistencia de los trabajadores crecía sin cesar. La represión era, pues, una exigencia que también comenzaba a atravesar a esos grupos de la tecnocracia. Esta iba siendo, a su vez, atrapada entre su necesidad de apoyo político de los trabajadores al proyecto de conciliación de clases y la necesidad de someterlos por la represión, con lo cual se alejaba la posibilidad de conquistar su apoyo.

La política del régimen en su conjunto, iba apareciendo así como gestora y prisionera de las nuevas contradicciones del capitalismo peruano.

Del desarrollo de esas contradicciones en la etapa siguiente, bajo los impactos de la crisis, irá surgiendo dentro del régimen, una fracción nueva, formada por miembros de ambas corrientes, y que puede calificarse de tecnocrático-estatista porque originándose principalmente en el seno de la corriente tecnocrático-nacionalista (Velasco, Tantaleán), ponía un énfasis mayor en la ampliación del capital estatal. Y frente a la masificación de la resistencia de los trabajadores a la política del régimen, esa fracción irá conduciendo el autoritarismo tecnocrático de éste hacia una orientación fascista.

(1) Véase el artículo "La Actual Coyuntura Política y las Tareas de la Clase Obrera", y el Editorial, de *Sociedad y Política*, No. 4, Lima, setiembre 1973.

LA CRISIS ECONOMICA Y LA AGUDIZACION DE LAS CONTRADICCIONES

La erradicación del componente oligárquico en las bases sociales del Estado, culmina, simbólicamente con la forzada renuncia de Vargas Caballero y el descafeinamiento de la cúpula más reaccionaria de la Marina, para dar paso a uno de los pocos marinos velasquistas como Ministro de Marina. Estos hechos fueron realizados por Velasco, con el apoyo de los otros sectores del gobierno y de las FFAA, en mayo de 1974.

Ese momento de remoción de los escombros oligárquicos del seno del régimen militar, coincide con el agravamiento de los efectos de la crisis internacional del capitalismo sobre la economía del país, a través del derrumbe de los precios internacionales de los principales productos de exportación, lo que refuerza los impactos de la recesión y la inflación internacional sobre el capitalismo dependiente.

Como lo habíamos señalado, también, en la edición confiscada de esta revista (2), la asociación entre el capital estatal y el capital monopolista internacional se ampliaba y profundizaba al mismo tiempo que avanzaba la crisis del capitalismo a escala internacional. Y eso, por el carácter dependiente de la previa estructura productiva y de los principales proyectos de acumulación del régimen, significaba que la economía peruana y la política económica de aquel iban quedando aprisionados en el pantano de la crisis.

Era previsible, en consecuencia, la agudización de las luchas de clases entre capitalistas y trabajadores y de los conflictos entre las principales fracciones del frente capitalista, con su secuela de pugnas por la hegemonía dentro del régimen militar.

Al estallar la crisis, para el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se planteaban dos problemas básicos:

1) Cómo distribuir los decrecientes recursos entre las contrapuestas exigencias de las principales fracciones del capital, estatal, privado y asociado; y dentro de cada una, entre cuáles proyectos de acumulación.

No solamente para mantener la ya debilitada capacidad del régimen para administrar los conflictos dentro del frente capitalista y entre los apetitos de diversos grupos de la tecnoburocracia civil y militar que usufructuaban de los recursos del poder. Sino también para impedir el estancamiento de la actividad económica y los problemas sociales y políticos que se derivarían.

2) Cómo enfrentar la creciente resistencia de los trabajadores, que ahora ya no solamente debían pagar la construcción del "modelo peruano", a lo cual se les había estado obligando, sino también los costos de la crisis, para amortiguar la caída de la tasa media de ganancia del capital y, sobre todo, del capital monopolista internacional.



LA EXPROPIACION DE LA PRENSA Y LA ACELERACION DEL CORPORATIVISMO

A fines de julio, el régimen militar decretó la expropiación de los periódicos de circulación nacional que aún quedaban en manos privadas.

Este acto de vasta resonancia interna e internacional, tenía en ese contexto un doble significado. El primero, complementar la eliminación de los restos de la presencia oligárquica, y eliminar los canales de expresión de la ideología liberal burguesa. Así, en el momento de agravación de las dificultades económicas y políticas del país, las fracciones más reaccionarias del frente capitalista no podrían influir, públicamente, en defensa de sus intereses fraccionales, ni oponerse a la difusión de la ideología corporativista.

El segundo, establecer el completo control corporativo sobre los medios de comunicación masiva (radio y televisión estaban ya bajo control estatal), como uno de los instrumentos principales para impulsar el encuadramiento ideológico de las masas, en apoyo de la acción de los organismos corporativos ya establecidos o por establecerse. Se permitiría solamente que se expresaran los principales matices del proyecto corporativo, que se desprendían de la amalgamada pero contradictoria composición de intereses de grupo y de corrientes ideológicas dentro del régimen.

Característicamente, la ley respectiva establece que el debate ideológico sólo puede hacerse dentro de los "parámetros de la revolución peruana". Se dispone la transferencia posterior de los periódicos a los "sectores sociales organizados"; pero éstos son, por supuesto, organizaciones policlasistas que el propio régimen va creando administrativamente, atándolas con un cordón umbilical al aparato de la administración estatal. Y el Estado retiene el control de todos los medios de comunicación a través del Sistema Nacional de Información, cuyo jefe es un General con rango de Ministro, que rige ese Sistema desde un organismo central, la Oficina Central de Información.

La intención de impulsar y acelerar el encuadramiento ideológico y orgánico de los trabajadores bajo el control corporativo del Estado, que estas medidas ponían de manifiesto, se complementaba con la accele-

(2) Véase en el ya citado artículo del No. 40, el texto encabezado por el subtítulo "Las Perspectivas Futuras".

ración de la organización de las "ligas agrarias" y de su Confederación Nacional Agraria (CNA), de la Juventud Revolucionaria Peruana (JRP), en lo cual estaba empeñado el SINAMOS, además del fortalecimiento de la Central de los Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP) y del Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana (SERP). Y para controlar toda posibilidad de brotes de autonomía de algunas bases, el Ministerio de Industrias, principalmente, estaba activamente dedicado a dividir la Confederación Nacional de Comunidades Industriales, creando la Comisión Reorganizadora (CR-CONACI), sobre cuya base se unificaría después la CONACI.

Los trabajadores veían con claridad a qué atenerse. La ofensiva económica del capital en crisis, y la ofensiva política corporativa del régimen militar, surgían como una tenaza agresiva para tratar de someter a los trabajadores a pagar los platos rotos de la crisis y, además, los costos de la consolidación del "modelo peruano" de explotación. Como luego veremos, esa ofensiva se estrellaría pronto frente a la masiva resistencia de los trabajadores.

LA POSICION DE LA BURGUESIA

Las fracciones privadas del capital, veían también, sin duda, que el destino principal de esa medida era someter a los trabajadores. Y aunque por obvias razones no podían aceptar la expropiación de los periódicos, no todos y menos en especial los grupos más poderosos, estaban dispuestos a oponerse y luchar frontalmente contra esa medida, sobre todo después de la derrota de la cúpula reaccionaria de la Marina.

Las ruidosas protestas de la joven "pituquería" de Miraflores y San Isidro por la expropiación de la prensa, fueron enérgicamente reprimidas por el gobierno. Y no solamente no contaron con el apoyo de los principales grupos de la burguesía, sino que la propia Cámara de Comercio de Miraflores, denunció airadamente el vandalismo de los jóvenes pitucos que destruyeron las vidrieras de las elegantes "boutiques" y bancos de la burguesía.

Así, las fracciones liberales de la burguesía, radicadas principalmente en la mediana y pequeña burguesía industrial y comercial, eran abandonadas a su suerte por los grupos monopolísticos de la clase. Eso facilitaría, la posterior clausura, con deportación de sus miembros, de Opinión Libre, semanario en que se refugiaron los periodistas de "La Prensa", último bastión importante de la prensa oligárquica, junto con Caretas y Oiga, órganos de la mediana y pequeña burguesía liberal y desarrollista, respectivamente, que no obstante sus discrepancias en materia de política económica, convergían en sus críticas a la expropiación de la prensa.

En cambio, la línea política de los grupos monopolísticos de la burguesía privada, de apoyo crítico a la política económica y de masas del régimen militar, se manifestó claramente en el congreso anual de empresarios, el CADE, en noviembre de 1974, en declaraciones de respaldo a las medidas fundamentales del gobierno, ofrecían el apoyo del capital monopolístico

privado nativo a la consolidación del modelo peruano, siempre que no se ampliara aún más el capital estatal y se contuviera más enérgicamente la ya extendida resistencia de los trabajadores, desde comienzos de setiembre.

La ventajosa asociación de esos grupos burgueses con el capital estatal, siempre que éste no se ampliara a costa de ellos, que había originado ya un año antes su falta de apoyo a las críticas reaccionarias de la mediana y pequeña burguesía industrial y agraria contra el capital estatal, explicaba ahora esa posición de la burguesía monopolista, además de su debilidad económica y política frente a los agentes tecnoburocráticos que, encabezados por la fuerza militar, construían las bases del capital estatal con la asociación y la protección del capital financiero internacional.

Esa debilidad, empujaba a la burguesía monopolística, mientras pudiera sostener sus posiciones de asociación ventajosa con el capital estatal, a ofrecer su reticente apoyo a la política del régimen militar, construyendo un frente común contra la movilización reivindicativa y política de los trabajadores, bajo la sombrilla protectora de la FFAA.

Entre tanto, sin embargo, los estragos de la inflación internacional se abatían sobre los grupos más débiles de la mediana y pequeña burguesía industrial y comercial, aquellos colocados en posición competitiva con el capital monopolístico en los mismos rubros de producción o de comercio. La ya deteriorada situación de esos grupos, por los convergentes efectos de la concentración de capital y de las presiones reivindicativas de los trabajadores, comenzó a empujarlos a la bancarrota, con todo lo que eso implica para una masa inmensa de trabajadores.

El característico crecimiento del ejército industrial de reserva de los ciclos de crisis del capitalismo, comenzó a engrosar rápidamente la legión de desocupados y subocupados ya previamente muy numerosa, víctimas sin defensa de la inflación de precios.

De esa situación se aprovechaban rápidamente todos los otros grupos de la burguesía, mediana y monopolística, para tratar de reducir directamente, además de los mecanismos inflacionarios, el nivel promedio de los salarios reales, y reprimir la protesta de los trabajadores por medio de la expulsión de los grupos más combativos de dirigentes y activistas sindicales. Los trabajadores eran sometidos a pagar el mantenimiento de las altas tasas de ganancia, ahora asediadas por la inflación internacional, la cual permitía a los grupos más poderosos de la burguesía monopolística internacional, transferir a sus arcas la mayor parte de la plusvalía generada en las economías dependientes, como la del Perú.

INTENSIFICACION Y MASIFICACION DE LA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

Desde mediados de año de 1974, todos estos problemas se fueron agudizando rápidamente. Se ampliaban las capas de trabajadores afectados por la inflación y el desempleo, y la convergencia entre la política empresarial privada y la embestida corporativista

del régimen militar, comenzaba a hacerse intolerable para los grupos más organizados de trabajadores.

Tras los violentos enfrentamientos de comienzos y de fines de 1973, cuando la represión se abatió sobre los trabajadores, sobre todo en los últimos meses de ese año, contra los trabajadores del sur del país y en especial sobre el magisterio clasista, no se habían producido grandes movimientos huelguísticos durante varios meses. Pero a través de aquellas luchas, los trabajadores habían aprendido a descubrir la mano brutal de su enemigo de clase detrás de los ropajes verbales de la conciliación de clases y la amenaza a la autonomía de clase de sus organizaciones, detrás de la prédica sobre la "democracia social de participación plena".

Con una más clara conciencia de su situación, con mayor experiencia de lucha y empujados por el deterioro de su nivel de vida, los trabajadores iniciaron en setiembre de 1974, un nuevo período de grandes movilizaciones. Ya no solamente en defensa del empleo y del salario, sino también contra la imposición corporativa.

Desde entonces, la movilización reivindicativa y política de los trabajadores, contra la política del régimen militar y de todo el frente capitalista, no ha hecho sino ampliarse y profundizarse, abarcando a capas cada vez más grandes, hasta cobrar una escala masiva particularmente después de febrero de 1975, a partir de cuando prácticamente todos los sectores de trabajadores se incorporan a la resistencia contra la política económica y corporativa del frente capitalista.

Por todas partes, las bases sindicales y las dirigencias medias del movimiento obrero, presionaban inclusive sobre las cúpulas sindicales de orientación reformista y burocrática, como la dirección de la CGTP y de la FETIMP, obligándolas a denunciar el "cerco a la clase obrera" (CGTP) y a declarar la huelga de toda una rama (FETIMP), después de muchos años.

Quizás, lo que mejor da cuenta del descontento y del ánimo combativo de los trabajadores, es el hecho de que en la huelga general de los trabajadores Arequipa, hacia fines de 1974, no solamente la inicial oposición de la dirección de la FDTA fue derrotada y rebasada, sino que la totalidad de las bases de la CTRP local abandonaron a esa espuria organización oficialista y se sumaron a la huelga.

Ciertamente, este ascenso y masificación de la movilización proletaria, no alcanzaba ni alcanzó aún la profundidad necesaria como para llegar a la coordinación e integración organizada de las luchas. Esta debilidad era el pago forzoso de las bases proletarias, a la política de conciliación oportunista de la dirección de la CGTP con la política reformista del régimen militar, principalmente. Pero también a la debilidad política de los núcleos socialistas de la clase, que venían surgiendo, es verdad, apenas en los últimos dos o tres años.

Esa debilidad, permitía y permite al régimen militar un margen aún relativamente amplio para manobrar, tratando de mantener divididos a los trabajadores, reprimir en unos casos, hacer limitadas concesiones a los núcleos más fuertes, y dilatar los conflictos hasta su dilución con los más débiles y de menores ingresos.

No obstante, este desplégue movilizador y de resistencia de los trabajadores, impulsaba también ten-

dencias de coordinación y de articulación organizativa entre los núcleos más organizados y de conciencia más avanzada, y ellas tuvieron en noviembre de ese año un primer nivel de cristalización, al realizarse la Primera Asamblea Nacional de Sindicatos Clasistas. Allí asistieron más de un centenar de sindicatos importantes, y las Federaciones de Mineros, de Maestros, de Aduanas, entre las principales, y la Confederación Campesina del Perú. De esa Asamblea, a pesar de las divisiones sectarias entre las agrupaciones de izquierda allí representadas, surgió el Comité de Coordinación y Unificación Sindical Clasista (CCUSC).

Ese resultado inicial de los impulsos de articulación organizada de las corrientes más combativas de los trabajadores, no ha logrado aún consolidarse. Pero esa Asamblea tuvo otra importancia. Fue el primer foro masivo, con la asistencia de más de un millar de trabajadores de todas partes del país y de todos los sectores económicos, en que el proletariado debatió abiertamente la política económica, laboral y de masas del régimen militar. Los representantes de las fracciones más avanzadas del proletariado, denunciaron el carácter capitalista de la política económica, el dominio de los intereses del capital monopolístico, privado y estatal, en el "modelo peruano", y el carácter corporativo de la dominación política que se intentaba imponer a los trabajadores. Y acordaron mantenerse en la lucha por construir las bases de la resistencia organizada y conjunta del proletariado, contra esa política, para avanzar hacia una futura revolución socialista de los trabajadores.

La conquista de la autonomía política del proletariado, cuyos primeros pasos sonaban ya en las grandes luchas del año anterior, alcanzaba un nuevo nivel. No se trata de magnificar inútilmente el nivel alcanzado, ni de desconocer las confusiones y los sectarismos, engendrados en el largo dominio de la ideología de las capas medias populistas y revolucionarias sobre el proletariado, y que marcaron esa asamblea. Pero, en la perspectiva del largo camino por recorrer hacia la revolución socialista de los trabajadores peruanos, esa asamblea constituye un hito cuya importancia, como eslabón de una tendencia, no cabe, tampoco, olvidar.

LAS PUGNAS DENTRO DEL REGIMEN. LA FORMACION DE UNA CAMARILLA FASCISTA

dadas aquellas condiciones, la política del régimen militar se orientó a mantener la asociación de intereses entre el capital estatal y el capital privado monopolístico, no tanto cediendo terreno en el problema de la afirmación del capital estatal, sino haciéndose cargo del interés común inmediato a ambas fracciones del capital: la represión de los trabajadores. Y en función

**SOCIEDAD
Y POLITICA**

de los intereses del propio capital estatal, acelerando la organización de las piezas que debían ser ensambladas para construir el orden corporativo.

Así, de un lado, la política empresarial privada de expulsar trabajadores, de reducir turnos arbitrariamente, de incumplir los puetos colectivos sobre condiciones de trabajo y de presionar sobre los trabajadores para el aumento de la productividad sin adecuadas compensaciones salariales, era claramente respaldada por la conducta de las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Interior. Las primeras diluían las reclamaciones de los trabajadores en la maraña de interminables trámites, fallaban en contra de ellas festinando las leyes. Las segundas, comenzaron un sistemático amedrentamiento de los dirigentes sindicales, amenazándolos y llevándolos a prisión sin causa y sin juicio.

De otro lado, se impulsaba la organización de la CNA, bajo el control riguroso del Sinamos y de los servicios de seguridad del Estado, colocando en la dirección del nuevo organismo a representantes del campesinado medio, inmediatamente convertidos en funcionarios rentados del Estado, como lo denunció Rendon Wilka en una entrevista para *Vísao*.

Como era esperado, las primeras expresiones de los funcionarios estatales de la CNA, eran una declaración de guerra a los campesinos semiproletarios y colonos que en diversos lugares, como Andahuaylas, invadían tierras de gamonales; al magisterio clasista agrupado en el SUTEP y a las organizaciones obreras que resistían la ofensiva económica y política del capital.

La acción divisionista en los sindicatos, cobró auge. Pero aquí apareció en escena una organización fascista, el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), evidentemente dirigido y financiado por algunos sectores del régimen, con el apoyo igualmente ostensible del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Interior, como pudo verse cuando fue asallado el local del Sindicato de Marcona, con amparo policial, y en la creación de una directiva sindical repudiada por la base de ese centro minero, pero que fue inmediatamente reconocida como la única legal, por el Ministerio de Trabajo.

El Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), fue organizado en una Convención de los trabajadores de la pesca, en mayo de 1972, y apareció por primera vez actuando como un grupo de choque, formado por matones a sueldo, que junto con la policía ayudó a masacrar a los trabajadores de Chimbote, en mayo de 1973. Desde entonces, no había tenido actuación pública, pero su reaparición ahora ponía al descubierto que venía siendo organizado y entrenado (3).

La aparición del MLR en esta nueva fase, no se redujo al asalto de sindicatos y a acciones rompedoras. Su reingreso como organización política, se expresó también en el comienzo de una furiosa campaña de prensa, acogida sobre todo en *ULTIMA HORA*, atacando con el más sombrío tono macartista a las organizaciones comunistas, al conjunto del proletariado clasista, y reclamando la depuración de la propia administración pública (del régimen, pues) y de

toda la prensa, en el mismo sentido.

De esa manera, se ponía al descubierto la existencia de un activo proceso de diferenciación política en el seno del régimen y el surgimiento de una tendencia fascista que iniciaba su movimiento hacia el control del poder, y, en primer término, hacia el control de las organizaciones corporativas ya establecidas.

La gran mayoría de los sindicatos clasistas, y la CGTP, reaccionaron con una lluvia de comunicados de protesta contra las acciones y la campaña de prensa del MLR. Los propios grupos de capas medias democrático-nacionalistas, que en ese momento predominaban en varios de los periódicos, se sumaron a la denuncia contra el MLR, atacando su condición fascista.

Entre tanto, el movimiento huelguístico de los trabajadores continuaba y el avance de la conciencia política del proletariado se manifestaba en una constante denuncia del corporativismo y de su engendro fascista recién aparecido.

Enfrentado a la intensificación y a la generalización del movimiento reivindicativo y anticorporativo de los trabajadores, el régimen era atravesado por conflictos agudos. Y, además, se acercaba la fecha de los programados actos celebratorios del sesquicentenario de Ayacucho (9 de diciembre), con la presencia de los presidentes de los países bolivarianos y sanmartinianos, y, por lo tanto, de los sangrientos fascistas del Cono Sur.

Fue en esas circunstancias, que sin duda ayudan a explicarlo, que se produjo el extraño y hasta ahora inexplicable incidente del atentado contra el Ministro de Pesquería, Tantaleán Vanini, el Primer Ministro y Ministro de Guerra, Mercado Jarrín, y el General Arbulú. El primero de ellos, era considerado como la cabeza principal del MLR.

El gobierno decretó el estado de sitio, y promulgó un decreto terrorista: juicio sumario y fusilamiento en 48 horas, de todos los autores materiales e intelectuales de todo atentado que causara lesiones o muertes, en particular a los miembros de las FFAA.

Simultáneamente desplegó una masiva ofensiva ideológica, destinada a presentar ante el país la imagen de una conspiración ultraderechista, de la CIA y la oligarquía, contra el régimen. Así, éste era... la izquierda. Y reclamando, por lo mismo, la necesidad perentoria de hacer causa común con el régimen, por encima de todas las discrepancias, frente al peligro ultraderechista.

Uno de los más conocidos periodistas de *Expreso*, principal periódico donde se expresaban los grupos más radicales de la pequeña burguesía democrático-nacionalista, dirigió a la izquierda una carta pública, llamándola a unirse con el régimen contra el enemigo común: la escalada derechista.

Esta campaña del régimen no dejó de tener éxito. Se acentuaron las oscilaciones entre la conciliación y la resistencia, que venían caracterizando a ciertas organizaciones de izquierda. Pero, sobre todo, bajo el estado de sitio, cesaron las huelgas y las protestas, de modo que las fiestas del sesquicentenario de Ayacucho transcurrieron como si fueran en un país calmo y sin luchas de clases.

Entre tanto, sin embargo, los efectos de la crisis económica se agravaban diariamente. La inflación crecía y el estancamiento de algunos sectores de la actividad económica era evidente. La ofensiva empresarial

(3) Véase a este respecto, la entrevista a un miembro del MLR, en *Marka*, No. 9, 10 de octubre de 1975, pp. 12-14.

contra los trabajadores, al amparo del estado de sitio, arreció.

Los aislados restos oligárquicos y los grupos de la mediana burguesía liberal, que se expresaban en Opinión Libre y Caretas, respectivamente, huérfanos del apoyo de la burguesía monopólica, trataron de aprovechar la situación para criticar la política del régimen. Opinión Libre, avanzó hasta proponer la formación de un frente civil. Fueron prontamente clausurados y deportados. Oiga, de su lado, hasta ese momento semanario oficialista, vocero de las corrientes tecnocrático-desarrollistas del régimen, comenzó una campaña de críticas a la política económica del régimen, acusándolo de ocultar los efectos de la crisis. Fue clausurada y deportado su director. Se cerraban así los últimos resquicios de opinión fuera del propio régimen, y este ingresaba en una pendiente dictatorial. El APRA, como lo señaló en setiembre el Ministro de Aviación en una entrevista a Ercilla, durante su visita a Chile, "driblababa".

Al término del año 74, los trabajadores volvieron a la carga. Numerosas huelgas estallaban en diversos lugares del país y principalmente en Lima. Casi todas fueron ilegalizadas y reprimidas. Pero los despidos y las quiebras de numerosas empresas se intensificaron, lanzando a miles de desocupados a la calle.

Simultáneamente, arreció la embestida del MLR contra varios sindicatos, particularmente en la industria automotriz y metalmeccánica, y su ofensiva ideológica en Última Hora, convertida ahora en órgano de esa agrupación fascista. Reactualizando los viejos tópicos apristas y de los más reaccionarios grupos social cristianos, el MLR atacaba a la izquierda socialista y a la propia corriente democrático-nacionalista de las capas medias que apoyaban al régimen, acusándola de comunista o procomunista.

Los grupos de las capas medias democrático-nacionalistas y social demócratas que tenían lugar en parte en la prensa, contestaban esos ataques acentuando la denuncia sobre el carácter fascista del MLR. Pero, aterrados de ser llamados comunistas, esos grupos proclamaban también su anticomunismo, insistiendo sin embargo que lo hacían desde una posición humanista.

La prensa se dividió, pues, en el debate entre dos vertientes anticomunistas: los fascistas y macartistas, de un lado, y los humanistas, del otro.

No obstante, frente a la embestida del MLR, apoyado y dirigido por un sector del régimen, la parte "humanista" de la prensa era obligada a sostener, con vacilaciones ciertamente, la lucha de los trabajadores contra el MLR y contra la ofensiva empresarial apoyada por los Ministerios de Trabajo y del Interior.

El avance del MLR en el control de algunos de los aparatos corporativos, se reveló con un comunicado de la dirección de la CTRP, en que ésta declaraba su constitución en Comisión Sindical del MLR. Pero, en los otros organismos, en particular en la CNA y en la JRP, se mostraba la mayor presencia de las corrientes democrático-nacionalistas. La JRP atacaba el MLR.

Todas estas eran indicaciones suficientemente claras de que el control de las organizaciones corporativas y del propio régimen, era disputado activamente. De un lado, por el sector que dirigía al MLR. Del otro, por el sector que se apoyaba en las capas medias de orientación democrático-nacionalista y social de-

mócrata. El primero, parecía estar conformado principalmente por el Ministro de Pesca, al Ministro de Trabajo, el de Interior, el Jefe de Sinamos, con rango de Ministro, el Ministro de Industrias, el Jefe del Sina-di, con rango de Ministro. El segundo, era identificado principalmente con el Ministro de Minas y con el Jefe de la Segunda Región Militar del país.

Mientras que el primer grupo disponía de varias de las principales organizaciones de control político del Estado, el segundo tenía, sin embargo, una posición importante de fuerza militar.

Por su composición, la fracción fascista se reclutaba al mismo tiempo desde las previas corrientes tecnocrático-nacionalistas (Tantaleán) y de las tecnocrático-desarrollistas (el Ministro de Industrias). El grueso de la corriente tecnocrático-desarrollista, fluctuaba probablemente entre ambas posiciones.

Como estas pugnas habían venido desarrollándose desde mediados del año anterior, el General Velasco había venido ocupando una posición arbitral, apoyado en la legitimidad de su autoridad dentro del gobierno y en las FFAA, así como sobre las propias capas democrático-nacionalistas y social demócratas que apoyaban al régimen. Eso permitía mantener la articulación y la cohesión del conjunto del gobierno. Pero las disputas internas habían llegado a un clima de agudización y en su transcurso, las repetidas muestras de arbitrariedad en la conducción del régimen y en la distribución de mandos y de privilegios en las propias FFAA, habían ido reduciendo la legitimidad del velasquismo en el Ejército y enconado el antivelasquismo en la Marina y la Aviación.

En el seno del Ejército venía creciendo una corriente llamada "institucionalista", precisamente, que era identificada con el General Morales Bermúdez, Jefe del Estado Mayor, y próximo a ocupar el cargo de Primer Ministro y Ministro de Guerra, al retiro del General Mercado Jarrín, en los primeros días de febrero.

Todos estos problemas sin duda intensificaron las disputas y los reacomodos y alianzas dentro del régimen y en las FFAA. A mediados de enero, Lima era un pueblo de rumores. Uno de ellos se refería a un serio retroceso en la salud de Velasco.

Y, en efecto, el General Velasco dejó el Palacio para ir a tomar un descanso de dos semanas, precisamente en la casa de playa del General Tantaleán, Ministro de Pesca. Al final del mes de enero, anunciaba un mensaje al país.

Las tensiones internas del régimen debían haber llegado a un punto tan alto, que el periódico La Prensa, en la víspera de ese mensaje, publicó un editorial de tono dramático. Nunca como ahora, sostenía ese editorial, fue tan delicada la situación interna del régimen; nunca fue por eso, tan importante la palabra del Jefe de la Revolución. Y, ojalá, diga la palabra justa.

Velasco dijo la esperada palabra. Pero no era la que sus seguidores y aduladores en la prensa alimentada por los grupos "humanistas" de las capas medias, deseaban. Aunque oblicuamente, Velasco dejó establecido su apoyo al MLR. Era claro, desde ese momento, que la posición arbitral de Velasco cedía lugar a su identificación con los sectores que, dentro de su régimen, optaban por imponer de modo autoritario y violento el control corporativo sobre los trabajadores.

**DE FEBRERO A SETIEMBRE:
AGUDIZACIÓN
DE LAS LUCHAS DE CLASES
HEGEMONIA, AISLAMIENTO Y
DESCABEZAMIENTO DE LA
CAMARILLA
VELASQUISTA-FASCISTA**

La ascensión del General Morales Bermúdez al cargo de Primer Ministro y Ministro de Guerra, coincidió con el inmediato estallido de la huelga de la policía y su secuela de saqueos e incendios del 5 de febrero.

Probablemente, esa huelga se gestó sobre la base del descontento de la tropa de la Guardia Civil, por los salarios bajos y las duras condiciones de trabajo, y se fue organizando espontáneamente. Pero, los hechos posteriores a esos incidentes, muestran también que de ello se sirvió la oficialidad de la policía, de formación anticomunista extremadamente reaccionaria, para hacer valer sus propias reivindicaciones: autonomía institucional frente al Ejército, bajo cuyo mando estaban algunos de los cuerpos policiales; equiparación de rangos, salarios y privilegios con los del Ejército; y, notablemente, participación en el gobierno a través de un Ministerio.

Desde el día siguiente de los saqueos e incendios del 5 de febrero, la prensa —con excepción de El Comercio, bajo dirección demócrata cristiana y de Última Hora, vocero del MLR— acusaban al APRA, la CIA, la oligarquía y la ultrazquierda, de haber producido esos incidentes, como parte de un plan conspirativo, del cual la huelga de la policía habría sido una pieza clave. Fotografías numerosas probaban, en efecto, la participación de agitadores coordinados en los saqueos e incendios, y algunos de ellos eran reconocidos como agitadores apristas. Esa prensa, Expreso en particular, reclamaban la represión contra los conspiradores.

Otra vez, como en noviembre, esos sectores de la prensa, producían una imagen según la cual el régimen en su conjunto era atacado desde fuera por una conspiración apro-cia-oligárquica.

Pero, cómo explicar entonces que el gobierno y en especial las autoridades del Ministerio del Interior, hubieran dejado que el descontento de la tropa de la policía y la agitación de la oficialidad reaccionaria, llegaran hasta estallar en una huelga? . Cómo explicar que el Ministerio del Interior, guardían específico del orden público, así como el conjunto del gobierno y de las FFAA, hubieran permitido que una ciudad de tres millones y medio de habitantes, cuyo casi 50 o/o es subocupado, con problemas de inflación, desocupación, desabastecimiento popular, olas de huelgas, quedara tan totalmente desguarnecida durante tres días? . Cómo explicar por qué inclusive el mismo día de los saqueos e incendios, el ejército saliera a controlar la situación en la calle sólo cuando los incidentes se estaban generalizando en la ciudad, no obstante que esa misma madrugada los tanques aplastaran el cuartel policial dirigente de la huelga?

La cobardía y el oportunismo de la pequeña burguesía "humanista" que predominaba en la prensa, su servilismo frente a Velasco, determinaron que esos grupos buscaran refugio su desesperación, en la más cómoda imagen de una conspiración derechista contra el régimen en su conjunto y desde fuera de él, en lugar de reconocer lo que, sin duda, olfateaban: que esos hechos, como los de noviembre, eran ya signos inequívocos de las disputas por la hegemonía dentro del régimen militar. Que la CIA estuviera metida en estos hechos, sin duda era cierto. Que el APRA, sea en su conjunto o en fracciones, lo estuviera también, lo atestiguan las fotografías. Nada de eso implicaba, sin embargo, que operaran desde fuera del régimen y en contra del conjunto de éste.

Por lo demás, en ese momento todo el mundo sabía que en el APRA pugnaban dos tendencias. Una, mayoritaria, que buscaba una conciliación con el régimen militar, sobre la base de una amplia comunidad de ideas y del origen aprista de muchas de las concepciones puestas en práctica durante el proceso, tratando de persuadir a los militares de la conveniencia de esa alianza, practicable a través de un nuevo orden constitucional que permitiera un juego electoral en que el partido pudiera participar. La otra, minoritaria, que exigían una presión más enérgica de oposición, para conseguir esa vuelta a las prácticas electorales.

En esas condiciones, llamar a la defensa del régimen en su conjunto, como lo hacían esas capas medias "humanistas", equivalía derechamente a asumir la defensa de la embestida autoritaria y violenta del corporativismo, ya que el propio "jefe indiscutido e indiscutible de la revolución peruana" —título otorgado por los "humanistas" a Velasco— había ya definido su apoyo a esa fracción fascista.

El proletariado y los demás explotados no cayeron en la trampa, así como no habían participado para nada en las asonadas del día 5. Por el contrario, fué sobre todo a partir de entonces que, frente a una brutal ofensiva de los empresarios y de las autoridades de los Ministerios de Trabajo e Interior, bajo la cobertura del estado de sitio y toque de queda impuesto desde el 5, los trabajadores masificaron su movilización de resistencia reivindicativa y anticorporativa.

No obstante, los grupos democrático-nacionalistas y social demócratas y las cúpulas sindicales de orientación reformista y burocrática, intentaron organizar un frente político en apoyo del régimen.

Surgieron así, de una parte, el Comité de Coordinación de las Organizaciones Populares, con la participación de la cúpula de la CGTP, de la CNA, de la CNT, y otras organizaciones menores. Y paralelamente, un grupo de directores de periódicos y de altos funcionarios administrativos del Estado, publicaron un manifiesto llamando a la constitución de un Movimiento de la Revolución Peruana (MRP), como la organización política del régimen, y proclamando su filiación tercermundista. Ambos organismos, eran dirigidos por gentes conectadas al sector tecnocrático-nacionalista del gobierno.

Inmediatamente después, el General Velasco dirigió un mensaje al país. Proclamando que los causantes de las asonadas, eran el APRA y la CIA, sostuvo, sin embargo, que no habría represión porque el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada era humanista y



porque no tenía nada en contra de las bases apristas sino contra sus caducas dirigencias. Cuidadosamente diferenció a los militantes del proceso, de los que solamente lo apoyaban. Ubicó entre los últimos a los firmantes del llamamiento a la formación del MRP; les agradeció en tono suave ese apoyo, pero les recordó enérgicamente que sólo las FFAA tenían el derecho de dirigir al país y promover la organización política del régimen. Finalmente, despejando su posición ideológica, hizo tajante su definición anticomunista y anunció las próximas medidas de formación del aparato político oficialista.

Tras ese discurso, el COCORP y el MRP se eclipsaron sin pena ni gloria. En cambio, el gobierno publicaba dos decretos sucesivos, nombrando el Comité Militar Coordinador de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), y promulgando las Bases Ideológicas de la Revolución Peruana.

El Comité Militar Coordinador de la OPRP, estaba formado por el General Sala Orozco, Jefe del Sinamos, que lo presidía; por el General Tantaléan Vanini, Ministro de Pesquería; por el General Richter Prada, Ministro del Interior; por el Vice-Almirante Jiménez de Lucio, Ministro de Industrias; por el jefe del COAP, General Graham; y por el General Fernández Maldonado, Ministro de Minas y Energía. Con excepción del último, cabeza del sector gubernamental al que apoyaban los grupos democrático-nacionalistas y social demócratas, todos los otros eran públicamente considerados miembros de la fracción fascista.

El documento llamado Bases Ideológicas de la Revolución Peruana, era una hábil codificación de las principales formulaciones que el Sinamos había venido elaborando y difundiendo a lo largo del proceso, y a las cuales adhería el conjunto del régimen. Dentro de su vacua generalidad "pluralista", el texto proclamaba el "humanismo revolucionario" como la ideología del régimen, y cuyas fuentes, se alegaba, son el socialismo, el libertarismo y el cristianismo. En nombre de las dos primeras, algunas bastas ruedas de molino eran propuestas como las hostias de la comunicación ideológica de los militantes del proceso.

De ese modo, el "humanismo revolucionario" era una bandera entre cuyos pliegues avanzaba la escalada fascista.

El round de febrero dejaba a la fracción velasquista-fascista ganadora por un alto margen de puntos. Manteniendo su control de piezas claves de la administración estatal, avanzaba en el control del aparato

corporativo que entraba en su fase de ensamblaje, con el MLR como escalón de choque. La figura del nuevo Premier y Ministro de Guerra, el General Morales Bermúdez, se mantenía en la penumbra.

Desde ese momento, dos procesos cruzados dominan el escenario político del país. Uno, la intensificación de las luchas de clases entre el capital y el trabajo, otro, la agudización de la disputa por la hegemonía dentro del régimen.

Cristalizada y triunfante, la fracción velasquista-fascista desencadenó una doble ofensiva. Contra los trabajadores y sus organizaciones independientes, de un lado. Y contra los grupos de capas medias democrático-nacionalistas y social demócratas, que eran las principales bases políticas de apoyo de las corrientes tecnocrático-desarrollistas y democrático-nacionalistas que, dentro del régimen, se oponían a aquella fracción. Cada una de esas ofensivas, ha tenido un destino diferente.

La ofensiva contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas, fue una combinación de la embestida empresarial y de la del MLR, con el desembozado apoyo del gobierno controlado por la fracción velasquista-fascista. Al amparo del estado de sitio, arreció la expulsión de trabajadores de base y dirigentes sindicales, además de múltiples formas de hostilización contra ellos. El MLR impulsó su acción de rompe-huelgas y de división de sindicatos y maltrato terrorista a los trabajadores. Y la policía se dedicó a apresar sistemáticamente a dirigentes y activistas sindicales, mientras el Ministerio de Trabajo bloqueaba las reclamaciones sindicales. El estado de sitio se convirtió en una auténtica trampa para los trabajadores, durante varios meses.

Los trabajadores, por su parte, enfrentaron esa ofensiva empresarial y fascista, económica y política, extendiendo y profundizando sus movilizaciones y ganando en claridad política y capacidad de organización.

A lo largo de los meses siguientes y por la primera vez en decenas de años, todas las capas de trabajadores se fueron incorporando al despliegue movilizatorio, reivindicativo y antifascista. Los campesinos continuaron invadiendo tierras de gamonales; aumentaron las huelgas del proletariado minero, fabril, de construcción, de transportes, servicios; la vasta mayoría del magisterio, volvió a demostrar en las elecciones a la cooperativa, su unidad y su resistencia a la política corporativa y económica del régimen; los trabajadores

de las universidades, de los bancos, y de la propia administración estatal y para estatal, aduanas, seguros, correos, teléfonos, telégrafos, promovieron numerosas y frecuentes huelgas. En Arequipa, la ciudad era enteramente paralizada por una huelga general, sostenida al mismo tiempo por las organizaciones obreras y las organizaciones de las barriadas, el primer hecho de este tipo en el país.

Ya no se trataba ahora solamente de la reivindicación salarial, de empleo, de condiciones de trabajo. Las consignas anticorporativas y antifascistas, la lucha por la autonomía de clases de las organizaciones de los trabajadores, por la defensa de sus libertades democráticas, pasaron a ser patrimonio y bandera de la gran mayoría de los trabajadores.

La defección conciliadora de la cúpula de la CGTP, impedía la coordinación y articulación de estas movilizaciones, y trababa los impulsos hacia un programa conjunto, reivindicativo y político, de los trabajadores. La debilidad de las organizaciones de la izquierda socialista, por el primitivo sectarismo y burocratismo de unas y las vacilaciones de otras frente al régimen, se manifestaba también allí. A pesar de todo, las bases de trabajadores avanzaban enfrentándose a todo el frente capitalista, estatal y privado, a la embestida fascista. Maduraba la conciencia anticapitalista y algunas organizaciones sindicales sectoriales surgían fortalecidas: CCP, SUTEP, FETIMP, FEB, CENTROMIN. La ofensiva empresarial y fascista se mellaba los dientes frente a la masiva resistencia del proletariado.

En el otro frente, la ofensiva velasquista-fascista contra las bases políticas de las corrientes adversas dentro del gobierno, consistió principalmente en el recrudecimiento de la campaña de prensa del MLR, contra los grupos democrático-nacionalistas y social demócratas de la prensa y de la administración pública, acusándolos de procomunistas, y en la presión del Sinadi para desalojar a algunos de ellos de su lugar en la prensa, sobre todo en La Crónica.

Esos grupos de periodistas, intelectuales, técnicos, sin duda apoyados en la fracción tecnocrático-nacionalista del régimen y de las FFAA, contestaron esa ofensiva denunciando el macartismo y el fascismo; los más radicales pasaron a apoyar parcialmente las luchas populares. Ciertos órganos como La Jornada, suplemento de La Prensa, encabezaron esa corriente, junto a otras publicaciones independientes nacidas en esa etapa, como Marka, colocada en una posición de apoyo crítico al régimen.

Probablemente, esa ofensiva velasquista-fascista se combinaba también con otros movimientos en el seno de las propias FFAA. Y parecía avanzar sin tropiezos. Pero, la repentina caída de la salud de Velasco, víctima de un ataque de hemiplejía en el mes de marzo, lo obligó a abandonar sus funciones durante mes y medio. La autoridad de Velasco en el gobierno y, aunque debilitada, también en las FFAA, era la pieza clave del poder de la fracción fascista en el gobierno. Para ésta la enfermedad de Velasco era un grave problema.

De su penumbrosa estancia, el Premier y Ministro de Guerra, Morales Bermúdez, pasó a ocupar la jefatura del gobierno y a una frenética actividad. Cabeza visible de las corrientes llamadas institucionalistas en las FFAA, pronto demostró su capacidad para convertirse en el eje de articulación de todas las corrientes que, por motivaciones diversas, se oponían a la frac-

ción velasquista-fascista dentro del gobierno y de las FFAA.

Tomó firmemente en sus manos las riendas del gobierno. Rápidamente pasó a proyectar su imagen sobre el país, acudiendo a ceremonias de diálogo público con diversos sectores de población y a giras del mismo carácter en diversos lugares del país. Simultáneamente; organizó un equipo de técnicos del gobierno para diseñar las líneas de una política económica para enfrentar la agravada situación económica, lo cual desembocó en las medidas de reajustes de precios y salarios del mes de julio.

La ofensiva empresarial y gubernamental contra los trabajadores no cedió un ápice. Las propias medidas de política de precios-salarios del Premier, estaban claramente encaminadas a descargar aún más sobre los trabajadores, el peso principal de la crisis económica.

Sin embargo, los grupos democrático-nacionalistas y social demócratas en la prensa y la administración pública, encontraron que su piso se fortalecía, en la medida en que comenzaba a hacerse visible una alianza entre las corrientes tecnocrático-desarrollistas y tecnocrático-nacionalistas del gobierno, adversarias a la fracción velasquista-fascista, bajo la conducción de Morales Bermúdez.

Esa situación se acentuó definitivamente, al producirse una revuelta de la oficialidad de la Marina contra el Ministro Faura, velasquista que representaba esa arma en el gobierno. A pesar de que el cambio del Ministro de Marina era una conquista de las corrientes más reaccionarias de las FFAA, su resultado global objetivo era el definitivo aislamiento de la fracción velasquista-fascista en el seno de las FFAA. De ese modo, esa fracción retenía aún piezas claves del aparato político y administrativo del Estado, pero quedaba cada vez más claramente aislado de las corrientes más fuertes de las FFAA.

A partir de ese momento, la fracción velasquista-fascista quedaba convertida en una camarilla, capaz aún de influir en la vida política del país por su lugar en el Estado; pero crecientemente aislada de las bases de las FFAA y enfrentada a la masiva resistencia de los trabajadores. Su destino estaba sellado, a menos que un audaz golpe de mano le permitiera forzar las circunstancias.

Y fue eso lo que intentó esa camarilla. El gobierno arrojó a fondo la ofensiva contra los trabajadores y contra los más radicales grupos de periodistas que apoyaban a los adversarios de la camarilla. Tras un virulentamente anticomunista discurso de Velasco, en el aniversario de la independencia, se decretó la deportación de los principales dirigentes del SUTEP, la Federación Minera, la CCP, a los periodistas de Marka, a dirigentes políticos de izquierda y, además, a dirigentes apristas que resistían la conciliación de su partido con el régimen velasquista.

La agitación política en el país subió de punto. Los trabajadores protestaron por todas partes y dentro de la propia tecnocracia estatal, decenas de gentes firmaron un comunicado de protesta junto con cientos de intelectuales, periodistas, profesionales, dirigentes sindicales y políticos. Con sus vacilaciones características, algunos periódicos como Expreso, criticaron primero y explicaron justificatoriamente después, esas medidas, lo mismo que el PCP.

Entre tanto, según parece, la fracción velasquis-

ta-fascista puso en marcha una conspiración destinada a eliminar del gobierno y de las FFAA, a los principales cabezas de las corrientes más claramente adversarias de esta camarilla. Fue, en esas circunstancias, que se dio el golpe del 29 de agosto.

LAS CAUSAS DE LA DERROTA DE LA CAMARILLA FASCISTA Y EL SIGNIFICADO DEL GOLPE DE AGOSTO

Sobre la base del recuento precedente, podemos ahora esbozar algunas conclusiones principales sobre los factores básicos que condujeron a la derrota de la camarilla velasquista-fascista.

1.- Ante todo, es importante reconocer que no obstante su gravedad para la inmensa mayoría de los trabajadores, la crisis económica no ha llegado aún a constituir para el capital monopolístico, tanto estatal como privado, en el Perú, una amenaza inmediata de destrucción. El régimen militar y la burguesía monopolística mantienen todavía una capacidad bastante amplia de manejo de la situación. Sin duda, la destrucción de una parte apreciable del mediano y pequeño capital y el estancamiento relativo de la producción del resto, implica una declinación relativa de la tasa de ganancia media del capital en el país, sobre todo en el último año. Pero eso no ha llegado aún a poner en riesgo de destrucción al capital monopolístico.

2.- La estatización de una parte importante del capital y el desarrollo de la capacidad administrativa del Estado, han permitido que el régimen militar tenga aún la posibilidad de retener un margen de maniobra bastante amplio, a pesar de la creciente vulnerabilidad de sus principales proyectos de acumulación a las presiones comerciales y monetarias de la crisis internacional. Así, para el capitalismo en el Perú se muestra la inmensa ventaja de un eje fuerte de capital estatal y de un régimen político autoritario y tecnocrático.

3.- A ello han contribuido tres factores decisivos: a) La protección financiera del capital monopolístico internacional, sea invirtiendo directamente, asociándose a los proyectos de inversión estatal, u otorgando préstamos y créditos en los momentos necesarios. Eso muestra, de paso, la esencial solidaridad del capital estatal con el capital monopolístico internacional, contra las ingenuas especulaciones de ciertos grupos sobre el carácter burgués nacionalista del régimen actual. b) La debilidad de la mediana y pequeña burguesía, más afectada por la crisis, para presionar por sus intereses fraccionales dentro del régimen. c) La conciliación oportunista de las cúpulas políticas y sindicales de una parte del movimiento obrero, junto con las vacilaciones de otros grupos de izquierda, confundiendo la conciencia de los trabajadores.

4.- A pesar de la masiva extensión de sus movilizaciones reivindicativas, y de la maduración de una conciencia anticapitalista en importantes núcleos, el proletariado y los otros explotados no han alcanzado aún ni la coordinación organizada para sostener sus reivindicaciones con un frente conjunto de clase, ni el programa y la organización políticos necesarios como para amenazar a fondo el poder del capital, que el régimen militar defiende. Dada esta situación de los tra-

bajadores, la represión convencional, la masiva manipulación ideológica con todos los medios de comunicación bajo su control, y la prédica de conciliación de clases, son todavía los instrumentos que el capital monopolístico y su régimen militar, pueden usar con eficacia para contener las movilizaciones de los trabajadores y tratar de imponer sin violencia extrema la integración corporativa.

5.- En esas condiciones, para el capital monopolístico y para su régimen militar, el fascismo era aún una opción no indispensable. Pero a eso debe añadirse el hecho de que para la mayor parte del frente burgués privado, así como para la mayoría de las corrientes de base en las FFAA, la legitimidad del liderazgo velasquista estaba en cuestión.

Para la burguesía privada, porque las reformas previas, el origen social de Velasco (considerado por esas razones como un "resentido social peligroso"), deslegitimaron su conducción, y porque, además, la camarilla velasquista-fascista tenía visiblemente una vocación estatista,

Para la tecnocracia desarrollista, mayoritaria en las FFAA, la arbitrariedad creciente de la camarilla perturbaba la normal distribución de poder y de privilegios y en consecuencia arriesgaba la institucionalidad de las FFAA. Para la tecnocracia nacionalista, minoritaria pero con fuerza relativa en las FFAA, además de ese riesgo sobre la cohesión institucional, la violencia fascista deterioraba su potencial base política entre las capas medias "humanistas" y entre las cúpulas sindicales y políticas reformistas del proletariado.

6.- Por todo ello, el avance de la hegemonía de la camarilla velasquista-fascista en el gobierno, no solamente era una opción prematura para el capital monopolista, sino que, además, implicaba riesgos de fractura en las FFAA y en el frente capitalista conjunto, en el preciso momento en que se extendían las movilizaciones reivindicativas y políticas de los trabajadores.

7.- De todo ello se desprende el significado esencial del golpe de agosto: la necesidad imperiosa del capital monopolístico, de asegurar la cohesión institucional de las FFAA y ampliar la base política del régimen militar por la reconstrucción política del frente capitalista, para poder enfrentar con más fuerza el creciente desarrollo del movimiento reivindicativo y político del proletariado y de las demás capas de explotados del país.

LA "SEGUNDA ETAPA DE LA REVOLUCION": REORGANIZACION DEL REGIMEN Y DEL FRENTE CAPITALISTA

No es necesario detenerse en lo obvio: la continuidad del carácter capitalista esencial del régimen militar; de las bases de la asociación entre el capital estatal, ahora ampliado y fortalecido, con el capital monopolista internacional, principalmente, y con el capital monopolista dependiente (o nativo), secundariamente, siendo el capital estatal el eje central de la organización del capital en el país. Y, en la necesaria continuidad del corporativismo, como instrumento de

dominación política sobre los trabajadores, objetivamente necesario cuanto más se amplía y se consolida este "modelo peruano" de explotación capitalista.

En cambio, importa descubrir, descascarar, en las medidas principales y en las formulaciones del régimen, después de agosto, en qué van consistiendo y cómo se van diseñando las líneas centrales de acción con que se intentará, en esta etapa, afirmar, legitimar e imponer ese modelo económico y político del capital bajo la crisis.

1.- La recomposición política del régimen militar.

Aquí, el hecho central es la eliminación de la cúpula dirigente de la tendencia fascista dentro del gobierno. Más adelante veremos si eso significa la eliminación de las bases del fascismo en el Perú.

En consecuencia, la composición del régimen resultante del golpe de agosto, es la de una alianza entre las corrientes tecnocrático-desarrollistas y tecnocrático-nacionalistas del frente capitalista. Su eje de articulación, son los grupos más moderados de ambas, bajo el liderazgo de Morales Bermúdez.

Políticamente, cada una de esas corrientes varía en grados diversos de moderación y de radicalidad, que, además, fluctúan y cambian según la evolución del enfrentamiento entre el capital y el trabajo. Pero, ambas corrientes se articulan sobre la base de un terreno de interés común, que es el capital estatal. El liderazgo de Morales Bermúdez, tiene, en ese sentido, el papel de articular este frente capitalista, con algunos elementos de bonapartismo.

Dentro de las FF.AA. la diferenciación, esquemáticamente, parece ser la siguiente: la Marina, la mayor parte de la Aviación y de la Policía, con las tendencias más reaccionarias de las corrientes tecnocrático-desarrollistas, más algunos núcleos del Ejército. El grueso de éste, con las corrientes más moderadas de esa misma corriente. Y una minoría del Ejército, aunque con posiciones importantes de mando, y aislados miembros de las otras armas, con las corrientes tecnocrático-nacionalistas. Igualmente, es probable que núcleos de orientación fascista hayan surgido, aunque todavía reducidamente, en todas las armas, pero principalmente en el Ejército.

La profundización de las luchas entre el capital y el trabajo, atraviesa ahora más definitivamente a la FF.AA.

Es sobre este telón de fondo que conviene observar los cambios en la posición relativa de cada una de las ramas de las FF.AA. dentro del régimen actual.

Amparadas en el institucionalismo que sustituye a la arbitrariedad velasquista, la Marina, la Aviación y la Policía, tienen ahora una mayor autonomía institucional y una mayor gravitación sobre el régimen. Los representantes de la Marina y de la Aviación dentro del gobierno, son ahora designados fundamentalmente por el comando de cada arma. Pero, quizás, el ejemplo más claro de eso, es la presencia de un General de la Policía en el gobierno como Ministro sin Cartera, y el cambio de la jefatura de la Guardia Republicana por un oficial de este cuerpo en lugar de un miembro del Ejército, como era antes. De esta manera, ahora se trata de un Gobierno de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Además, se han incorporado al gobierno dos civiles. Uno como Ministro de Economía y Finanzas y otro como Ministro sin Cartera, a cargo de la presidencia

de la Comisión Nacional de Propiedad Social (CONAPS). Ambos tienen formación y experiencia estrictamente burguesa. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas fue antes funcionario del mismo Ministerio, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A ello se añade el ingreso como Presidente del Banco Central de Reserva, de un ex-alto funcionario del Banco Mundial que pasa directamente de allí a su nuevo cargo.

Esta ampliación de las responsabilidades de la tecnocracia burguesa en el gobierno, probablemente es un intento de superar el aislamiento político posible de los militares y de compensar la debilidad tecnocrática de los militares en el manejo de la economía y de las finanzas públicas. Además, prepara, acaso, el camino hacia un gobierno militar-civil más definido, si las circunstancias lo exigieran.

2.- La política económica y la reorganización del frente capitalista

No se han modificado las líneas fundamentales de la política económica que se lleva a cabo desde que el General Morales Bermúdez asumiera la jefatura del gobierno por enfermedad de Velasco. Pero algunos elementos importantes han comenzado a cambiar.

El nuevo Ministro partió por la franca admisión de la gravedad de la situación económica del país, que su antecesor había en vano tratado de ocultar durante la mayor parte de su gestión, porque ello equivalía a admitir el fracaso de la política económica del régimen. Con el duro realismo de la tecnocracia burguesa, el actual Ministro dio paso a una medida que el voluntarismo militar había convertido en casi un tabú, pero que ya era homogéneamente exigida por todo el capital monopolístico privado y estatal: la devaluación monetaria, en más de un 160 o/o. Por supuesto, el Ministro y sus técnicos insistieron en que la incidencia de esta devaluación sobre el costo de vida de los trabajadores sería nula, y condenaron rabiosamente las huelgas.

En segundo lugar, está profundizándose una política ya iniciada por Morales Bermúdez, antes de agosto: subsidios financieros a la mediana y pequeña empresa privada, principalmente minera.

Esta política se acompaña de un cambio ostensible de actitud del gobierno frente a estos estratos medios y pequeños de la burguesía. Como se recordará estas se enfrentaron abiertamente al régimen velasquista y éste contestó con la deportación del principal dirigente de esos grupos, que han sido los más afectados por la política económica del régimen y por la crisis. Ahora, en cambio, el nuevo Ministro de Industrias inició su gestión llamando a la Sociedad de Industrias, agrupación gremial de esas capas burguesas, a dialogar sobre sus mutuas conveniencias.

Es, pues, notorio el interés del nuevo equipo de gobierno, para restablecer la unidad de todo el frente burgués, reajustando para ello su política frente a cada fracción burguesa, tanto procurando reactivar en algo la actividad económica que en buena parte está en manos de la mediana y pequeña burguesía, como tratando de soldar un frente capitalista detrás del régimen, frente al despliegue de la resistencia masiva de los trabajadores.

3.- La política laboral

En este campo, lo que el régimen de Morales está

haciendo es, principalmente, sistematizar los rasgos que ya venían caracterizando su política desde antes de agosto, y que proceden desde 1973.

Primero, una política salarial que lleva a la congelación del nivel promedio de los salarios reales, en refuerzo de los mecanismos inflacionarios y de devaluación monetaria. Así se ha implantado un tope a las transacciones salariales (70 soles), por debajo de la tasa anual inflacionaria, mientras suben los precios y se devalúa la moneda.

Segundo, una política de ilegalización de las huelgas y de no admisión de las reclamaciones sindicales en el Ministerio de Trabajo, resucitando para ese efecto leyes vigentes en 1913, antes de la legalización de la jornada de las 8 horas y de los sindicatos (1918).

Tercero, la exigencia insistente de Morales Bermúdez y todo su equipo, masivamente machacada por la prensa, radio, televisión, de levantar la productividad y la producción, mientras se rechaza las reclamaciones salariales, amenazando con represión, y calificando de contrarrevolucionarias a esas reclamaciones.

Cuarto, la ruda presión sobre los trabajadores para someterse a la ideología y al lenguaje corporativo, exigiéndoles llamar "nuestra empresa" a las empresas capitalistas, "pliegos de participación" a los pliegos de reivindicaciones, y no hacer huelgas contra el capital estatal porque sus empresas son "de todos los peruanos", ya que el Estado es "de todos los peruanos" (Ministro de Minas y Energía).

Quinto, un renovado impulso a las organizaciones sindicales corporativas, especialmente CTRP, SERP y CNA. El nuevo jefe del Sinamos, en una reciente reunión nacional de la CTRP, la proclamó como la máxima representante de los trabajadores, a pesar de su condición espuria y minoritaria. La CTRP, el SERP, la CNA y la JRP publican frecuentes comunicados conjuntos, amenazando abiertamente a los trabajadores que se movilizan por sus reivindicaciones.

Las bandas fascistas del MLR no están públicamente en acción. Pero es conocida y visible su presencia en la CTRP, SERP y CNA.

En esta campaña contra los trabajadores, participa la totalidad de la prensa y los otros medios de comunicación. A pesar de sus ambigüedades, la mayoría de los grupos democrático-nacionalistas están pasándose abiertamente al campo de la represión. Rápidamente está agotándose el terreno intermedio en el enfrentamiento entre el frente capitalista y los trabajadores.

4.- La burguesía y la "revolución peruana".-

No es, pues, sorprendente que, dadas estas condiciones, se observe un acelerado proceso de reaglutinación política de todos los estratos de la burguesía privada, detrás del régimen dirigido por el eje Morales Bermúdez.

Desde el primer momento del cambio, la práctica totalidad de las representaciones gremiales de la burguesía, así como sus principales agencias políticas, han hecho pública su satisfacción y sus expectativas por el derrocamiento de Velasco, pero sobre todo por la asunción al mando de Morales Bermúdez.

Vale la pena, acerca de esto, citar un texto que expresa con precisión la actual posición de la burguesía privada frente al actual régimen:

"Es ya hoy aceptado en todos los niveles, la irreversibilidad del proceso de cambios que vive el Perú, frente al cual los empresarios, los trabajadores y todos

los peruanos tienen que asumir, con entereza, una posición justa que contribuye a consolidar este proceso, para lo cual, hay que apuntalar el aspecto más significativo que está dado por el desarrollo económico nacional. Sin desarrollo económico, y sin incremento de la producción y de la productividad, no puede haber distribución equitativa de la riqueza, no puede hablarse de hacer justicia a los que menos tienen. De ahí que se haga cada vez más necesario, que todos los trabajadores depongan actitudes egoístas, actitudes de enfrentamiento con las empresas, y redoblen su acción acatando la invocación que en días pasados hiciera el señor Presidente de la República, General EP. Francisco Morales Bermúdez". Y cita un trozo del discurso del Presidente, en el cual, efectivamente, se llama a los trabajadores a deponer actitudes egoístas en aras de la productividad y del desarrollo nacional. (SINTESIS SEMANAL, publicación de la CONACO-Confederación Nacional de Comerciantes- No. 986, sábado 13 de setiembre de 1975, pág. 2. El subrayado es mfo).

El APRA y el belaudismo han publicado, también, declaraciones en el mismo sentido. En particular el APRA difundió una declaración de su máximo organismo, su Secretariado Colegiado, reiterando su acuerdo básico con las reformas hechas en el proceso, su satisfacción por la eliminación de los aspectos políticos que vulneraban los derechos humanos, y afirmando su "apoyo responsable" al nuevo Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Aún más, las camarillas sindicales que el ARPA controla, la CTP, la FEN-CAP, la Central de Empleados Particulares y la Federación de Choferos, han publicado sendos comunicados no sólo apoyando al nuevo gobierno, sino llamando a la defensa de la "revolución peruana".

Dos notas claves sobresalen en este despliegue de las posiciones políticas de la burguesía. Un apoyo más abierto al régimen, y el llamado a defender y consolidar esta "revolución peruana". Así, mientras los trabajadores se enfrentan más profunda y abiertamente al régimen, la burguesía se aglutina en torno de él. La coincidencia del lenguaje de los portavoces del gobierno y de la burguesía, exigiendo a los trabajadores deponer sus actitudes "egoístas" es, en este clima, natural.

Para comprender la actual posición de la burguesía, que consolida una tendencia en curso y manifestada ya claramente en el CADE 74, no es suficiente reconocer el carácter capitalista de la política del régimen militar, ni la rudeza de la política laboral, si se recuerda que en etapas anteriores fue bastante marcada la reticencia de los grupos monopólicos de la burguesía y abierta la oposición de la mediana y pequeña burguesía industrial y agraria. Tampoco es suficiente apelar a las diferencias en el origen y en el estilo personal de Morales Bermúdez respecto de Velasco.

Es indudable que todos y cada uno de esos elementos hacen parte de la actual definición política de la burguesía. Pero ellos son evidentes. No lo son igualmente, otros dos fundamentales.

Primero, que en la medida en que el actual capitalismo en el Perú, es el resultado del conjunto de cambios y de reajustes producidos por este régimen, en las bases de la acumulación, en las formas de organización de la propiedad y en sus mecanismos de articulación, la actual burguesía en el Perú y en especial sus



grupos más beneficiados, es también, en esa misma medida, hija de este proceso. Es, pues, hija de la "revolución peruana" y, en consecuencia, ésta es su "revolución".

Segundo, que al irse agotando definitivamente el componente oligárquico en la definición de las luchas de clases en el país, y enfrentando de modo cada vez más depurado el trabajo contra el capital, la burguesía es empujada necesariamente, malgrado sus reticencias, a asumir este proceso como la trinchera última de defensa de sus intereses. Es decir, a asumir la defensa de la "revolución peruana". Y dada su debilidad económica y política, separada de su asociación con el capital estatal y el régimen que lo sustenta, se ve forzada a aglutinarse políticamente en torno del actual gobierno, para poder enfrentarse conjuntamente al proletariado y los demás explotados del país, con el escudo de las FFAA, porque aquellos dan muestras de madurar su autonomización política de clase, preparando las bases de un nuevo movimiento socialista revolucionario.

Sin embargo, de todo ello no se deriva que la burguesía esté dispuesta al apoyo del régimen, sin tratar de hacer valer sus propias reivindicaciones. Ni que éstas sean las mismas para todos los estratos y grupos de la clase. Lejos de eso, en el marco de las profundas desigualdades y contradicciones de la estructura del capitalismo en el Perú, agudizadas por la crisis presente, los intereses fraccionales dentro de la burguesía son diferentes. Únicamente en coyunturas extremas, sería posible para todos ellos subordinarse al interés general de la clase. Esto es, bajo la amenaza inmediata de la revolución proletaria y ésta no es hoy, por lo menos, inminente.

En su conjunto, y bajo las actuales condiciones, la burguesía privada tiene dos reivindicaciones básicas: a) tratar de moderar los límites del crecimiento del capital estatal y conseguir que éste y la administración estatal sirvan de apoyo al desarrollo del capital privado y sean manejados, como hasta hoy, de modo privatista, como patrimonio colectivo de la clase.

La otra reivindicación fundamental es, evidentemente, la contención por todos los medios, de la movilización reivindicativa y política de los trabajadores. En esto está implicada, también, la anulación en la práctica de las limitadas posibilidades de fiscalización que la comunidad industrial permite a los trabajadores, lo que sólo puede hacerse por coacción política permanente.

Esas reivindicaciones generales no se traducen, en concreto, del mismo modo para todos los estratos y grupos de la burguesía. Así, por ejemplo, los grupos monopólicos pueden asociarse ventajosamente al capital estatal y pueden por lo mismo admitir la ampliación de éste en aquellas áreas de actividad que requieran grandes inversiones o que sean menos rentables. En cambio los grupos de mediana y de pequeña burguesía ocupan, precisamente, gran parte de esa áreas de menor rentabilidad. Por eso, requieren impedir que el capital estatal o su apéndice, la "propiedad social", avancen allí. Y como el proceso de concentración de capital que supone el "modelo peruano", no sólo no va a detenerse sino que será impulsado por la crisis, los intereses de ambos estratos de la burguesía no pueden ser simétricos en lo específico.

Del mismo modo, los grupos monopólicos pueden todavía, si la crisis no se agudiza muy rápidamente, deglutir la comunidad industrial, sobre todo si se procura castrar políticamente a los trabajadores, e inclusive hacer moderadas concesiones salariales a éstos. En cambio, para la mediana y pequeña burguesía, ambas cosas son actualmente cada vez más intolerables.

De allí, en consecuencia, que para la mediana y pequeña burguesía es urgente la represión de los trabajadores, en forma masiva y abierta. En cambio los grupos monopólicos pueden apoyar aún una combinación de manipulación y represión selectiva, sin dejar de presionar por la contención de las movilizaciones obreras, y la política de divisionismo sindical y de corporativización que el régimen implementa. Ciertamente, esa actitud tendería a cambiar rápidamente según el nivel de desarrollo de la capacidad política del proletariado y la intensidad de la crisis.

Dada su actual composición, el régimen tampoco puede hacerse cargo homogéneamente de estas reivindicaciones de la burguesía privada. A pesar de que para sus principales corrientes, el capital estatal y su asociación con el capital privado monopólico es un terreno de interés común, no son idénticas las expectativas de cada una de ellas sobre los resultados de esa asociación. Ni en el terreno de la distribución de recursos, ni en las modalidades de enfrentamiento a los trabajadores.

Además, no existen hoy día y si la crisis avanza existirán menos, los recursos suficientes para distribuir, inclusive inequitativamente, entre las varias fracciones del capital. Y sobre todo, para amortiguar las demandas reivindicativas de los trabajadores, como

base para impedir o disminuir el desarrollo de su capacidad política.

Por todo ello, continuarán y se agudizarán las pugnas por la hegemonía dentro del régimen. El terreno de compromiso que hoy articula a ambas corrientes principales y que permite la maniobra de sus grupos más moderados, está erosionándose cada vez más a prisa y eso irá fortaleciendo a los extremos. Las tendencias volverán a fluctuar y a intercambiar sus miembros como antes de agosto. Los mismos factores de base que llevaron a la reciente depuración, volverán a actuar, esta vez más maduros y definidos, para producir una nueva y decisiva depuración del régimen nacido en el golpe de agosto. Y, probablemente, en el sentido peor para los trabajadores.

LAS ALTERNATIVAS DE LAS LUCHAS DE CLASES.

dadas las incongruencias entre las corrientes principales de las tecnocracias, que hoy se articulan dentro del régimen y de las FFAA, y la continuidad de la masificación de la movilización de los trabajadores, en el período que comienza están esbozándose dos alternativas mayores para la evolución de las luchas de clases:

1.- La creciente polarización política de las clases básicas y de sus frentes respectivos, por la agudización de sus luchas. En este caso, fascismo y revolución socialista tenderán a surgir como las opciones necesarias de ambos frentes de clase.

2.- La convergencia entre las fracciones más moderadas del frente capitalista y las fracciones reformistas del movimiento obrero-popular, en la dirección de algo equivalente a los frentes populares del ciclo pasado de crisis en los años treinta, y cuya expresión en América Latina fue el Frente Popular de Chile, en 1938.

La mayor o menor posibilidad de cada una de estas alternativas principales, dependerá, a su vez, del comportamiento de la crisis del capitalismo internacional y del nivel de cristalización política que el actual movimiento socialista revolucionario dentro del proletariado, sea capaz de conquistar.

No podemos detenernos, en este ya largo artículo, a examinar a fondo el posible desarrollo de la crisis y del movimiento socialista revolucionario. Otros trabajos inmediatamente posteriores serán dedicados a esa finalidad.

Asimismo, quisiera que el lector tuviera en cuenta claramente, que las alternativas que se señalan, indican la dirección de las tendencias entrañadas en la actual situación, más no los límites ni las modalidades concretas de su desarrollo.

Así, por ejemplo, el fascismo puede abortar en un gorillato ultrarepresivo, con rasgos fascistas, pero sin la fuerza para imponer a los trabajadores su encuadramiento ideológico y orgánico en un Estado Corporativo. Y, del otro lado, el socialismo puede abortar en un régimen con influencia del proletariado, pero sin su hegemonía.

Del mismo modo, si las tensiones y conflictos dentro de las FFAA se agudizan amenazando la cohesión institucional, la burguesía puede presionar hacia una recomposición del gobierno por vía electoral. En este caso, probablemente las tendencias desarrollistas y li-

berales del frente capitalista podrían reaparecer, a través de sus actuales representaciones políticas (Apra, AP, PPC, DC), mientras del otro lado se posibilitaría la convergencia entre las capas medias democrático-nacionalistas y las tendencias burocrático-reformistas del movimiento obrero, moviéndose hacia un equivalente de Frente Popular.

PORQUE EL FASCISMO?

dos lecciones fundamentales se desprenden de la última etapa de las luchas de clases en el Perú, en que surgió y fue derrotada una camarilla fascista:

1.- Que el fascismo, como el socialismo, no resulta de un intento voluntarista de imposición de esas opciones, al margen del nivel de profundidad que en cada momento van alcanzando las luchas de clases. Una y otra alternativa son el resultado del conflicto político entre las clases básicas al máximo nivel, esto es, disputando abiertamente el poder, y de la derrota violenta de una de ellas.

2.- Pero la otra lección, aún más importante en lo concreto para los trabajadores peruanos, es que el sólo hecho de que aparezca en el Perú una tentativa fascista, a pesar de su debilidad y su posterior derrota, demuestra que la profundización de las luchas del proletariado y los demás explotados es ya, a pesar de sus insuficiencias actuales, una amenaza política para el poder del frente capitalista.

¿Por qué esto último? Porque el capitalismo en el Perú enfrenta en este momento dos problemas cruciales:

En primer lugar, la necesidad de hacer pagar a los trabajadores no solamente los platos rotos de la crisis económica, sino también y al mismo tiempo, la necesidad de obligar a los trabajadores a costear la imposición del nuevo modelo de explotación capitalista, precisamente en medio de la crisis.

En segundo lugar, el hecho de que la formación y ampliación del capital estatal, como el eje de articulación de ese modelo, ha obligado a poner en marcha la organización de un sistema político corporativo, como un instrumento de integración de los trabajadores bajo el control directo del nuevo Estado burgués.

La combinación de ambos factores, empuja a los trabajadores a una resistencia sin tregua. Porque no solamente hay que resistir la ofensiva económica redoblada. Sino también porque hay que resistir la destrucción de la autonomía de clase de nuestras organizaciones y la imposición del control estatal.

Esa combinación de la lucha económica con la lucha política de los trabajadores, que surge contradictoriamente de la propia política del capital, extiende el movimiento reivindicativo y madura la conciencia política del proletariado. De eso están surgiendo ahora las bases iniciales de un movimiento socialista revolucionario en el seno de la clase.

Y aunque este proceso es todavía políticamente débil, para el capital y sus agentes políticos tecnocráticos, dada su actual situación de crisis, surge como una amenaza potencial que hay que frenar y destruir. La violencia fascista y la ideología fascista brotan de allí.

Su primer brote quedó aislado y fue descabezado, por los factores que ya hemos señalado. Ni ideológica, ni orgánicamente alcanzó un desarrollo importante, ni logró ampliar sus bases sociales y políticas. Ideológicamente no pasó de la utilización de los viejos tópicos apristas y social cristianos tradicionales contra el comunismo, sin lograr producir una mitología global e integrada de un orden totalitario. Orgánicamente, a pesar de los recursos del Estado y del apoyo de núcleos militares no logró imponer su hegemonía sobre las actuales organizaciones corporativas, ni siquiera en la CTRP. Sus bases sociales, no pasaron de reducidos grupos lumpen y aún más reducidos trabajadores desclasados, con la contribución de tráfugos miserables de la antigua izquierda.

Sin embargo, las mismas de terminaciones fundamentales que produjeron ese chato brote fascista, están vigentes en el actual escenario peruano. Y si la crisis económica se agudiza, como todo parece indicarlo, y la lucha de los trabajadores avanza y se organiza en un más alto nivel, la desesperación de la mediana y pequeña burguesía será azuzada y utilizada por la burguesía monopólica, ya más profundamente afectada por la crisis, y en torno de esas demandas represivas será arrastrada, como ya lo está siendo, inclusive una parte de las capas medias de orientación nacionalista y anti-comunista "humanista", dentro y fuera de las FFAA.

En esta nueva etapa no sería, además, una camarilla reducida con legitimidad cuestionada, la dirección de las tendencias fascistas. El entero aparato político y militar del Estado, bajo un liderazgo plenamente legítimo, podría ponerse al servicio del fascismo, si las corrientes contrarias no son capaces de romper el frente capitalista y pasarse al servicio de los trabajadores, bajo el liderazgo del proletariado.

Por todo eso, fascismo y revolución socialista están contenidas potencial y concretamente en el curso del desarrollo próximo de las luchas de clases en este país.

Empero, como lo hemos señalado ya, en la aún insuficiente maduración política del grueso del prole-

tariado, se alimentan las cúpulas políticas y sindicales burocráticas y reformistas dentro del movimiento obrero.

Y de otro lado, paralelamente, en la aún manejable situación económica del capital estatal y del capital monopólico privado, se alimentan las corrientes moderadas de la tecnoburocracia capitalista hoy en el poder.

Estas corrientes políticas, en ambos frentes de clase, han convergido durante este proceso para tratar de construir una conciliación de clases. Entre la burocracia reformista del proletariado y la tecnoburocracia del capital, hay pues un terreno común de interés, que pasa por el capitalismo de estado.

Ni sus bases sociales, ni su fuerza política son deseñables. Tratarán, como lo están tratando ahora mismo, de mantener su proyecto político. Y usan a fondo, las vacilaciones y el primitivo dogmatismo de una parte de la izquierda organizada, para tratar de persuadir al proletariado menos avanzado, de la conveniencia de la conciliación de clases.

De esa convergencia entre la burocracia reformista dentro del movimiento obrero y la tecnocracia desarrollista y reformista de la burguesía, podrían desarrollarse tendencias hacia un Frente Popular, con el pretexto de alejar el fascismo, pero también para alejar la revolución socialista, dejando al proletariado prisionero político del capital a través de un orden corporativo, en este caso no llevado a su plena cristalización.

Solo si la crisis no se agudiza, y no se desarrolla el movimiento socialista revolucionario del proletariado, aglutinando en torno suyo a todas las capas de trabajadores explotados del país, esa alternativa podría tener alguna factibilidad. Su terreno de maniobra es, pues, muy estrecho y precario. Sus ilusiones son, por eso mismo, peligrosas porque terminarían abriendo las puertas al fascismo, bajo la agudización de la crisis.

Setiembre 1975.

**SOCIEDAD
Y POLITICA**

La crisis y la política económica del capital

I. LOS ANTECEDENTES DE LA CRISIS ACTUAL: REFORMAS Y CRECIMIENTO ECONOMICO DESDE 1968

El fracaso del intento reformista de Belaunde culmina en la crisis económica y social de 1967-68, abriendo el campo para la instauración del Gobierno Militar. En sus primeros momentos, este último se abocará a dos tareas principales: la superación de las dificultades económicas y el inicio de un amplio programa de reformas estructurales.

La crisis de 1967-68 fue enfrentada con energía por el régimen para restablecer las condiciones de la acumulación y aumentar la tasa de ganancia. Por un lado, se reordenaron las condiciones de la expansión al generarse una desvalorización del capital a través de la quiebra de las empresas medianas y pequeñas menos eficientes, de la reducción del ámbito del capital ficticio y especulativo en el comercio, la construcción, etc. Asimismo, la crisis estimuló la racionalización y la búsqueda de incrementos en la productividad en las empresas, recortándose o postergándose los planes de inversión frente a la caída de las ganancias. El régimen implementó una política económica restrictiva dirigida a comprometer el gasto público, limitar la demanda y las importaciones, aplicando igualmente un conjunto de restricciones monetarias y crediticias. Se creó de esta manera un marco apropiado a la recuperación económica, contribuyendo esta política a la atenuación de las presiones inflacionarias. Por otro lado, la crisis condujo a una reducción de los niveles de salario y empleo popular, así como a una mayor intensificación del trabajo, generándose un incremen-

to en la explotación de los trabajadores. Es así que en términos reales los salarios promedio bajan en Lima de 52.66 soles diarios en 1968 a 45.63 en 1969, operándose una reducción del poder adquisitivo del 15.4 o/o (cf. MEF "Plan Económico Anual de 1970", vol. 2, p. 163).

De esta manera la política económica descarga las consecuencias de la crisis sobre los sectores populares, deteriorándose el nivel de empleo y consumo de los trabajadores, para incrementar las ganancias de la burguesía nativa e imperialista, y crear un adecuado "clima de confianza" que facilite su integración en el nuevo proyecto de acumulación. El éxito de esta política se verifica en la evolución de las ganancias de las empresas: cerrando dos años de declinación consecutiva las ganancias experimentan en 1969 un incremento de 12.4 o/o en términos reales (cf. BCR, "Cuentas Nacionales del Perú 1960-73", 1974, p. 14).

Al mismo tiempo que promueve la recuperación económica del régimen inicia la realización de un amplio programa de reformas estructurales de carácter anti-oligárquico y "nacionalista". Estas transformaciones conducen a la estatización de un importante segmento de la economía, reforzando significativamente el peso de las empresas públicas. Se amplía, asimismo, el control y la intervención estatal en la economía. El programa de reformas se recubre con una ideología de conciliación de clases, cristalizada por ejemplo en la comunidad laboral, que intenta utópicamente cancelar las contradicciones de clase en la construcción de una "democracia social de participación plena".

Las reformas van configurando progresivamente el establecimiento de un capitalismo de Estado asociado al capital imperialista. Se cristaliza una alianza entre el capital estatal y el capital imperialista, que se con-

vierte en el eje central de la acumulación, incorporando de manera subordinada a los sectores más poderosos de la burguesía monopólica nativa. Al mismo tiempo, se desarrolla todo un aparato de control político corporativo sobre los trabajadores destinado a contener sus reivindicaciones, permitiendo así generar los recursos para implementar los grandes proyectos de inversión que asocian al capital estatal con el capital imperialista.

La recuperación económica, sustentada en la ampliación de las ganancias, permite desde 1970 un cambio en la orientación de la política económica, que asume una tónica expansionista y estimula un nuevo ciclo de crecimiento económico. De esta manera se registra una expansión promedio anual del 6,1 o/o entre 1970 y 1973 (cf. MEF, "Aspectos del Desarrollo Económico-Financiero del País", setiembre de 1973, p. 21), basada en el dinamismo de la industria y la construcción.

El principal beneficiario de este crecimiento fueron las ganancias de las empresas, que se incrementaron en un 29,9 o/o en términos reales entre 1969 y 1972 pasando de 13875,6 millones a 18022,2 millones. Igualmente, se elevó su participación en el ingreso nacional de 16,86 o/o a 17,49 o/o entre ambas fechas (cf. BCR, *op. cit.*, p. 14). Debe notarse que este incremento se produjo a pesar de la fuerte caída de los precios de exportación en 1971 y 1972, que redujo considerablemente las ganancias de las empresas exportadoras, de gravitación decisiva en la economía nacional. Por su parte, los salarios reales aumentaron en sólo 18,0 o/o entre 1969 y 1972, en gran medida como efecto de la recuperación de los deprimidos niveles generados por la crisis de 1967-69 (cf. BCR, "El Desarrollo Económico y Financiero del Perú 1968-73", p. 49).

Como consecuencia de esta situación, se generó una muy significativa ampliación del consumo de la burguesía y de los sectores medios asociados a la expansión capitalista. Mientras que la producción de bienes de consumo, destinados en lo fundamental a satisfacer la demanda de los sectores populares, se incrementó en 28,0 o/o entre 1970 y 1973, la producción de bienes de capital y consumo duradero, orientados básicamente a cubrir la demanda de la burguesía y de ciertos sectores medios, registró en el mismo período un crecimiento de 69,6 o/o. Un análisis de ciertas ramas industriales muestra con aún mayor claridad este fenómeno: mientras que la producción de alimentos y textiles se expandió en 27,6 o/o y 13,21 o/o respectivamente, la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (integrada en lo fundamental por electrodomésticos) y de material de transporte (compuesta esencialmente por automóviles) aumentó en 76,4 o/o y 96,8 o/o respectivamente en el período 1970-73 (cf. MIT, Boletín Estadístico Industrial, No. 13, p. 15).

El incremento de las ganancias fue estimulado por la racionalización de la producción y el mayor uso de la enorme capacidad instalada heredada del ciclo anterior de expansión. Contribuyó a este resultado la reestructuración y estandarización de la producción promovida por el Estado (reducción del número de ensambladoras, mayor integración nacional de autopartes, programa de medicamentos básicos, etc.), así como las inversiones que eliminaban los anteriores cues-

llos de botella de la estructura productiva. Igualmente, los nuevos requisitos de planificación y control estatal impulsan una modernización de la gestión empresarial, permitiendo generar programas de reducción de costos. De esta manera las empresas expandieron fuertemente su producción y elevaron sus ganancias sin realizar inversiones masivas.

Por otro lado, contribuyó a la generación de altas ganancias la implementación de un muy generoso programa de exoneraciones tributarias a la reinversión de capital y la política de precios de las empresas públicas. Estas últimas mantuvieron a un bajo nivel los precios agrícolas (controlados por la empresa pública EP-SA), atenuando por esa vía las presiones salariales y los precios de los insumos básicos de la producción (importados o fabricados bajo control del Estado que asume el costo del subsidio).

Esta situación de amplia y significativo aumento de las ganancias debería haber dado origen a un nuevo e importante ciclo de inversiones. Sin embargo, la tasa de inversión permaneció deprimida sin recuperar aún en 1972 el nivel alcanzado en 1966. En efecto, la participación de la inversión bruta fija pasa de 16,49 o/o del PBI en 1966 a 12,83 o/o en 1972 (cf. BCR, "Cuentas Nacionales del Perú 1960-73", p. 14). De este modo, si bien se desarrolló una expansión significativa de la producción el aparato económico no experimentó una modificación sustantiva.

Tres serían las principales razones de este retraso de la inversión. En primer lugar, el establecimiento de la asociación entre el capital estatal y el capital imperialista, con la incorporación subordinada de la burguesía monopólica nativa, se ha materializado a través de un largo y complejo proceso de negociación. Por esta razón los proyectos mineros y petroleros han sufrido demoras por las dificultades de financiación generadas por la evolución de estas negociaciones. Asimismo, el Estado modificó las normas de inversión extranjera en la industria. Estos cambios implicaron una postergación de las grandes inversiones imperialistas, que comenzaron a afluir fuertemente recién en 1973. En segunda instancia, condicionó este retraso la lentitud de las empresas públicas para diseñar e implementar proyectos de inversión, fuera de las áreas clásicas de infraestructura. En muchas ocasiones los proyectos se han materializado con demoras de 3 y más años, frente a los plazos previstos. Estas dificultades derivan en gran medida de la inexperiencia del Estado en la construcción de una base productiva, situación que se ha procurado solucionar recurriendo a una asociación aún más estrecha con el capital internacional, que ha tomado a su cargo no sólo la financiación de estos proyectos sino también su planeamiento y la supervisión de su ejecución. Por último, ha contribuido al retraso de la inversión la relativa falta de confianza del sector privado nacional en las nuevas reglas del juego establecidas por el régimen. La clarificación de estas reglas y los estímulos generados por la ampliación de la inversión estatal e imperialista han permitido una posterior recuperación de la acumulación privada nacional.

Como se ha señalado, esta situación determinó que gran parte del excedente producido no fuera acumulado, sino más bien se destinó a alimentar un creciente consumo parasitario de la burguesía y de algunos sectores medios, así como para sostener a una creciente burocracia.

EL PROYECTO DE ACUMULACION DEL GOBIERNO MILITAR

Desde 1968 se ha ido perfilando en el Perú con cada vez mayor claridad el intento de construir un poderoso sector estatal que, en asociación con el capital imperialista, acelere la acumulación y permita la inserción dependiente del país en un nuevo nivel de la división internacional del trabajo del mundo capitalista.

La estrategia adoptada por el régimen busca desarrollar esta inserción concentrando, en un primer momento, la acumulación en grandes proyectos, con un alto grado de tecnificación y una reducida capacidad de absorción de mano de obra. Estos proyectos están destinados a ampliar el sector exportador —especialmente en la minería y el petróleo— y a consolidar una infraestructura de base a través de las inversiones en transporte, irrigaciones, obras de electrificación, etc. Las inversiones asumen así un carácter complementario a la acumulación del capital monopólico internacional, generando una mayor producción de materias primas para alimentar la expansión de los centros imperialistas y proporcionándoles un campo de valorización para sus capitales, que abre la vía para una mayor transferencia de excedentes a las metrópolis capitalistas.

La materialización de estos proyectos de inversión depende de la asociación entre el capital estatal y el capital imperialista, que asume diferentes formas en los distintos sectores económicos. En la minería y el petróleo destaca la combinación de importantes inversiones extranjeras directas en la extracción con la participación del Estado en el transporte, refinación y comercialización de la producción. Tal es el caso de la inversión de 650 millones de dólares en la mina de Cuajone por la empresa americana Southern Peru Copper Corp., que es complementada por la construcción de una refinería estatal de cobre, financiada por el capital japonés, y por la comercialización estatal del mineral. En la industria se han desarrollado la forma de las empresas mixtas, en las que participan en proporciones variables el capital estatal y el capital imperialista, como en los casos de las empresas fundadas en asociación con la Bayer, Massey Ferguson, Volvo-Perkins, etc. Por último, debe subrayarse que la expansión de las empresas públicas se realiza fundamentalmente sobre la base del financiamiento, la tecnología y la supervisión del capital internacional.

El desarrollo de esta asociación ha determinado el incremento de los montos anuales ingresados vía la inversión directa extranjera en el país, que han pasado de 6 millones de dólares en 1969 a 316 millones en 1975 (cf. BCR, "El Desarrollo de la Balanza de Pagos del Perú 1968-72", vol. 2, p. 95, y La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 7-8). Hay que destacar igualmente el explosivo aumento de la deuda pública externa que sube de 737 millones de dólares en 1968 a 2165 millones en 1974 (cf. MEF, op. cit., p. 48, y La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 7).

En un segundo momento, la maduración de estos

proyectos de inversión abriría paso a una acumulación acelerada en el sector industrial, destinada a reforzar el circuito económico interno.

Los bases de esta acumulación se encuentran en la capitalización de la plusvalía extraída a los trabajadores y de la renta minera generada por la riqueza de los recursos de materias primas del país, que permiten una producción a costos inferiores al promedio internacional.

La implementación de este proyecto de acumulación implica la necesidad de mantener una alta tasa de plusvalía, conteniendo las presiones salariales y redistributivas de los trabajadores para generar los grandes excedentes necesarios para sustentar el esfuerzo de capitalización. Asimismo, la naturaleza y orientación de estas inversiones provocan la marginación y exclusión de grandes sectores de la población, que no serán beneficiados con este crecimiento concentrado en pocos proyectos muy tecnificados y dirigidos a la exportación, que no impulsan el desarrollo de la agricultura, especialmente en la sierra, y no conducen a la atenuación del desempleo y el subempleo, que afectan a cerca del 40 o/o de la población trabajadora según las cifras oficiales (cf. La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 6). Del mismo modo, la materialización de estos planes requiere una creciente regulación e intervención estatal en la economía para concentrar los recursos en las áreas prioritarias de desarrollo. Se plantean así con agudeza los problemas de la gestión de esta intervención, generándose fenómenos de despilfarro y corrupción.

El éxito de este proyecto de acumulación depende en gran medida de la coyuntura económica internacional que puede poner en peligro su estrategia de incorporación subordinada a la división internacional del trabajo, integración basada en la ampliación de la producción de materias primas y en la creciente participación en el circuito internacional del capital. Asimismo, el desarrollo de la resistencia de los trabajadores y su negativa a costear el esfuerzo de capitalización podrían trabar la acumulación.

Por otro lado, las tensiones internas del bloque en el poder, estimuladas por los anteriores factores, podrían poner en cuestión la estabilidad política indispensable para la concretización de este proyecto. En efecto, la construcción de un área de capitalismo de Estado asociado supone la redefinición de las relaciones entre el capital estatal y la burguesía nativa e imperialista. Al interior de la asociación se generan en consecuencia tensiones sobre la amplitud y velocidad de consolidación del sector estatal.

LOS INICIOS DE LAS DIFICULTADES ECONOMICAS EN 1973-74.

Desde fines de 1972 confluyen una serie de factores que tienden a deteriorar el nivel de ganancias del capital, socavando las bases de la expansión. Por un lado, se produjo la crisis pesquera, con la casi total paralización del sector por efecto de la desaparición de la anchoveta debida a razones climáticas y a las capturas excesivas operadas en años anteriores. Las dificultades de esta rama repercutieron en el nivel de las exportaciones y provocaron un debilitamiento de

la demanda industrial tanto por la compresión de la masa salarial de la pesca como por el cese de sus compras de insumos y bienes de capital, como redes, embarcaciones, etc. La recuperación de esta actividad se desarrolló en forma muy lenta en 1974-75.

Por otro lado, se agravó la crisis agrícola, disminuyendo la producción en un 3.6 o/o entre 1970 y 1973 (cf. BCR, "Cuentas Nacionales del Perú 1960-73", p. 24). No han sido superados los factores estructurales que traban la expansión de la producción agrícola como la insuficiente dotación de tierras, el bajo grado de desarrollo de las fuerzas productivas en el agro tradicional y la carencia de una adecuada estructura de transporte y almacenamiento. La política del régimen en el sector se ha limitado a repartir la tierra a una fracción minoritaria del campesinado y a establecer mecanismos para transferir excedente del campo a los centros urbanos e industriales para apoyar la acumulación del capital estatal y el capital imperialista. Los principales mecanismos empleados son el control oficial de los precios agrícolas, el pago de la deuda agraria y el incremento de la presión impositiva en el agro.

Han acrecentado las dificultades del sector agrario las contradicciones engendradas por la aplicación de la reforma agraria, como la descapitalización de los fundos por sus antiguos propietarios, la reducida eficiencia de la organización de la producción en las nuevas unidades agrícolas y los problemas para adquirir ciertos insumos básicos, como las semillas y los fertilizantes.

Desde 1973 comienza a agotarse el margen de ganancias extraordinarias derivadas de la racionalización del aparato productivo y del uso más intenso de la capacidad instalada. Por otro lado, avanza la concentración de capital en las grandes empresas, diferenciando crecientemente sus condiciones productivas y su rentabilidad de los medianos y pequeños centros productivos. Al mismo tiempo, se acentúan las presiones salariales como consecuencia de la mayor capacidad reivindicativa de los trabajadores. Este hecho se refleja en el aumento del número de huelgas que pasan de un promedio de 377 por año en 1968-72 a 788 en 1973, permaneciendo a un alto nivel en 1974 con la realización de 562 huelgas (cf. Denis Sulmont, "El Desarrollo de la Clase Obrera en el Perú", CISEPA, cuadro 7.2). Esta situación provoca un deterioro en la rentabilidad del capital, que asume un carácter más marcado en las medianas y pequeñas empresas.

De igual manera, desde 1973 se genera una brusca aceleración de la espiral inflacionaria incrementándose los precios en 15.1 o/o frente a un aumento promedio de 6.7 o/o entre 1969 y 1972 (cf. La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 6 y BCR "El Desarrollo Económico y Financiero del Perú 1968-73", p. 46). La intensificación de las presiones inflacionarias deriva del desarrollo de la acumulación monopólica, que genera desequilibrios intersectoriales, como el estancamiento del sector agrario, y requiere una política económica expansionista, que incrementa el déficit presupuestario y el crecimiento del crédito y la liquidez. Debe mencionarse igualmente el impacto de la inflación internacional en la estructura interna de precios, especialmente en un país con una economía altamente vulnerable y dependiente.

La convergencia de los factores mencionados afecta negativamente la tasa de ganancia, erosionando las bases de la expansión y anunciando una fase crítica para



la economía. Sin embargo, la profundización de las dificultades económicas es temporalmente contrarrestada por tres causas principales.

En primer lugar, se produce el auge de los precios de las materias primas en el mercado mundial entre 1973 y la primera mitad de 1974. Al incrementarse tan pronunciadamente las cotizaciones se elevan significativamente las ganancias del sector exportador, estimulando al resto de la economía. Es así como las ganancias del sector minero se elevan en un 246.1 o/o en términos reales entre 1972 y 1973 (cf. Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, "Perú Minero 1974", p. 288).

En segunda instancia, los desequilibrios intersectoriales son momentáneamente superados gracias al explosivo aumento del endeudamiento externo, que permite cubrir un considerable déficit en la balanza de pagos y mantener un alto nivel de importaciones. Debido a esta razón la deuda pública externa aumenta en 93.2 o/o entre 1972 y 1974 (cf. La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 7).

Por último, la política económica y la vasta intervención estatal en la economía permiten contener temporalmente dentro de ciertos límites a los desequilibrios económicos vía el control del comercio exterior y del sistema financiero, así como de la política de regulación estatal de los precios agrícolas y de los insumos de base. Al mismo tiempo la implementación del amplio programa de inversiones públicas estimula la demanda, especialmente gracias al desarrollo de la construcción impulsado por las obras públicas.

De esta manera, la expansión continúa en 1974 con un crecimiento del 6.6 o/o del PBI sustentado en la parcial recuperación de la pesca, así como en la dinámica del sector industrial y de la construcción (cf. La Crónica, 14 de febrero de 1975, p. 6), estimuladas por la política económica expansionista y por la constitución acelerada de stocks como medio de precaverse frente al alza de precios y a la escasez de insumos. Sin embargo, en 1974 se amplió la desigualdad del desarrollo intersectorial, permaneciendo prácticamente estancadas la actividad minera y la agricultura.

El desarrollo de la crisis mundial capitalista, que en su primera fase permitió apuntalar la rentabilidad del sector exportador peruano, genera desde mediados de 1974 un efecto diametralmente opuesto. En efecto, las cotizaciones y demanda de materias primas experimentan una baja significativa. Al mismo tiempo, se encarecen notablemente los precios de los insumos y bienes de capital importados por efecto de la inflación internacional. Como resultado de esta evolución

la balanza comercial sufre su primer déficit desde 1967, arrojando un saldo negativo de 426 millones de dólares que unido a los pagos por servicios y transferencias, generan un déficit en cuenta corriente de 809 millones de dólares. Esta brecha fue cubierta gracias al uso masivo del endeudamiento externo y de una importante financiación de corto plazo (cf. *Ibid.*, p. 7).

De ahí que las tendencias internas que apuntaban a una declinación de las ganancias desde 1973 ya no sean contrarrestadas por una coyuntura internacional favorable. Más bien, la influencia del mercado mundial agrava y profundiza esta declinación desde el segundo semestre de 1974. Se abre así un período de desvalorización de capital (cierres y quiebras de minas e industrias), intentándose igualmente, reducir personal y comprimir los salarios (despidos, vacaciones forzadas, supresión de turnos, endurecimiento en las negociaciones colectivas, etc.), con el objetivo de contrarrestar la caída de la rentabilidad.



2. LA CRISIS ECONOMICA Y SUS MANIFESTACIONES EN 1975

El agravamiento de las dificultades económicas, que se había comenzado a manifestar en la segunda mitad de 1974, se perfiló con contornos más definidos en el primer semestre de 1975. La tasa de crecimiento del PBI descendió a 2.5 o/o, declinando el ingreso por habitante. La pérdida de dinamismo de la expansión reflejó claramente la agravación del desarrollo desigual de los diferentes sectores productivos.

Cuadro No. 1: Evolución del PBI por sectores (variación o/o).

	1974	I semestre 1975
Agropecuario	2.3	-5.0
Pesca	40.9	25.0
Minería	2.5	-6.0
Industria	8.0	5.0
Construcción	19.5	4.5
Otros	5.9	4.0
PBI	6.6	2.5

Fuente: *La Crónica*, 27 de setiembre de 1975, p. 3.

La producción agrícola experimentó un fuerte descenso, profundizándose la crisis del sector. Influyeron en este resultado el mantenimiento de los precios agrícolas a un bajo nivel por efecto de la regulación estatal, con el consiguiente deterioro de la rentabilidad e imposibilitando en algunos casos aún el cubrimiento de los costos de producción. Debe sumarse a este factor las demoras en los pagos a los agricultores de las agencias comercializadoras del Estado (EPSA y EPCHAP), que los desfinancia y altera sus programas de siembra. Tuvo también un impacto desfavorable en la producción la escasez de insumos básicos (semillas, fertilizantes, etc.) y la insuficiencia de recursos crediticios otorgados al sector, así como las dificultades de la gestión dentro de las nuevas estructuras productivas creadas por la reforma agraria. De

esta manera, disminuyó fuertemente la producción de papa y arroz, registrándose decrementos menos graves en maíz, trigo y caña de azúcar. De ahí que el campesinado, especialmente sus sectores más pobres, tuvieran que costear una parte apreciable de las consecuencias de la crisis económica.

Se manifiesta así en el deterioro de la agricultura una de las consecuencias del proyecto de acumulación adoptado, que concentra los recursos en los grandes proyectos mineros e industriales, de mayor rentabilidad, materializados en el marco de la asociación entre el capital estatal y el capital imperialista. La actual orientación de las inversiones revela la incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas en el campo y para transformar las condiciones de vida y empleo de la mayoría de los trabajadores del agro.

La catastrófica caída de los precios y demanda de minerales por efecto de la crisis mundial ha conllevado una significativa reducción de la producción minera. Esta situación ha afectado con especial fuerza a la mediana y pequeña minería, cuyas condiciones productivas y económicas son más precarias. La gravedad de esta situación puede apreciarse en la comparación de los costos de producción: frente a un precio internacional que oscila alrededor de los 60 ctvs. de dólar por libra de cobre la mediana y pequeña minería tienen costos de 64 ctvs. por libra, mientras que en Toquepala, propiedad de la empresa americana Southern Peru Copper Corp., los costos ascienden a sólo 30 ctvs. (cf. *Andean Report*, setiembre de 1974, p. 4). De ahí que un importante conjunto de empresas de la mediana y pequeña minería hayan quebrado o clausurado temporalmente los yacimientos o, en otros casos, hayan procedido a significativas reducciones de personal. Como consecuencia de esta situación se han deteriorado significativamente los niveles de empleo en el sector, intentando los empresarios, igualmente, reducir el nivel de los salarios reales.

La construcción experimentó en la primera mitad de 1975 una notable desaceleración en su ritmo de expansión por efecto del estancamiento de la inversión pública y de las restricciones crediticias, reflejo de la orientación estabilizadora asumida por la política económica en el intento de atenuar los desequilibrios económicos y controlar la inflación. Esta menor expansión generó posiblemente un estancamiento del empleo en el sector, limitando asimismo sus efectos de estímulo al resto de la economía.

La agudización de la inflación, las restricciones y encarecimiento de la importación de insumos y bienes de capital, el control oficial de precios y la política de limitación del crédito determinaron una caída en la rentabilidad del sector industrial. Como consecuencia se extendió un conjunto de quiebras, especialmente en las pequeñas y medianas empresas más afectadas por esta situación y con menores posibilidades de resistencia. Igualmente, se generalizaron programas de reducción de personal, de racionalización de la producción y aumento de la productividad, multiplicándose los ataques a las organizaciones sindicales, como medio de contrarrestar la caída de las ganancias. Al mismo tiempo, el deterioro de los niveles de empleo, la contracción de importantes ramas económicas y la erosión del poder de compra de los asalariados determinaron un descenso en la tasa de crecimiento del sector industrial, especialmente marcada en la producción de bienes de consumo popular.

La agravación de la crisis económica se manifiesta igualmente en el deterioro de la balanza de pagos, que registra al final del I semestre de 1975 un déficit en la balanza comercial de 524 millones de dólares, que supera en un 30 o/o al saldo negativo obtenido durante 1974. Esta situación es consecuencia de la crisis internacional que ha conllevado una reducción de los volúmenes exportados y un deterioro de los términos del intercambio, al declinar las cotizaciones de las materias primas y subir los precios de los productos de importación (cf. *La Crónica*, 27 de setiembre de 1975, p. 4). El desequilibrio fue agravado por una elevación de las importaciones ocasionado por el sobreestocamiento de insumos generado por la actividad especulativa de los empresarios, así como por la fuga de capitales por la vía de la sobrefactoración de las importaciones. Como resultado de esta situación se registró una pérdida de reservas del orden de los 200 millones de dólares, a pesar de la gran masa de créditos a largo y corto plazo obtenidos en el mercado financiero internacional.

La política de restricción al crédito y especialmente, la pérdida de divisas generaron en el primer semestre de 1975 una aguda falta de liquidez en el sistema financiero, agravando los problemas de tesorería de las empresas, en particular de los medianos y pequeños centros productivos. (cf. Banco Continental, "La Situación Económica del Perú", II Trimestre de 1975, p. 3).

La política fiscal asumió también un carácter estabilizador al reducir el déficit económico del presupuesto a un 2.7 o/o del gasto total por la vía de la práctica congelación de los gastos y el incremento de los impuestos (cf. *Ibid*, p. 2). De esta manera, el Estado intenta controlar la inflación y restringir el aumento de las importaciones.

tación de la política económica, forzando a una modificación de la estrategia adoptada a inicios de año en el plan bienal 1975-76.

Las grandes líneas de las medidas adoptadas apuntan a tres objetivos principales. En primer lugar, a aliviar el estrangulamiento externo estimulando las exportaciones, conteniendo el crecimiento de las importaciones y mejorando la captación del endeudamiento externo. En segunda instancia, se busca asegurar las bases de la expansión en el mediano plazo, incrementando la generación de excedentes del sector público y privado, con el fin de materializar los planes de inversión afectados por la disminución de las ganancias resultante de la crisis. Al mismo tiempo, se intenta reanimar la demanda vía la ampliación de la inversión pública, la recuperación de la producción agrícola y del sector exportador con el fin de mantener la utilización de la capacidad instalada. En tercer lugar, se procura corregir las deformaciones que se habían ido creando en la estructura de precios por efecto de los subsidios y controles, así como mantener la inflación dentro de límites manejables, ya que los precios se habían incrementado en un 13 o/o en los primeros 6 meses de 1975.

El 30 de junio de 1975 se adoptaron las medidas de reajuste de precios y salarios, que fueron complementadas por una devaluación el 26 de setiembre. Los principales aspectos de estos dispositivos comprenden: 1) la eliminación de los subsidios estatales a los productos agrícolas importados; 2) la elevación de los precios de la mayoría de los alimentos, excluyendo el arroz y el azúcar, aunado a una baja en el costo de los fertilizantes gracias a un subsidio estatal; 3) el encarecimiento de un gran número de bienes de consumo, de servicios básicos (como el agua y la electricidad) y de productos industriales; 4) el incremento de los precios de los combustibles, de los pasajes y los fletes; 5) una devaluación del 16.3 o/o, acompañada de la unificación del mercado cambiario a la tasa de 45 soles por dólar; 6) un aumento del 18 o/o del salario mínimo; 7) un reajuste de 1600 soles mensuales a los empleados públicos y de 400 soles para los trabajadores del sector privado; 8) la fijación de topes salariales en las negociaciones colectivas, estableciéndose máximos de aumento de 1620 soles mensuales, que en casos excepcionales —dada una muy alta rentabilidad de la empresa— podrán elevarse a 2100 soles.

La implementación de estas medidas genera diversos problemas. Por un lado, los reajustes de salarios no compensan el alza del costo de vida, que se incrementará con aún mayor velocidad como consecuencia de estas disposiciones. Esta situación es especialmente grave para los sectores populares, cuyos niveles de vida han sido especialmente afectados por la inflación: los grupos de menores ingresos han experimentado un alza del costo de vida del orden de 31.2 o/o entre enero de 1974 y abril de 1975, mientras que los sectores de más altos ingresos sufrieron un incremento de los precios de 22.0 o/o en el mismo período. Este fenómeno surge como consecuencia del mayor aumento de los artículos de primera necesidad, que forman la base de la economía familiar de los sectores populares. Al incidir especialmente en los precios de las subsistencias el reajuste agravará aún más esta situación (cf. *Marca*, 12 de julio de 1975, p. 13). Asimismo, al calcularse los reajustes de remuneraciones sobre la base del salario mínimo (o salario

3. EL REAJUSTE DE PRECIOS Y SALARIOS Y LA DEVALUACION

frente al agravamiento de las dificultades económicas se hizo patente la necesidad de una reorien-

base) no se compensa la pérdida del poder adquisitivo del asalariado promedio. Debe considerarse también el significativo deterioro que experimentarían los niveles de vida de los trabajadores independientes (pequeños agricultores, comerciantes, etc.), que están excluidos del reajuste de remuneraciones. De igual manera, es muy probable que el control oficial de precios no pueda contener las presiones inflacionarias dentro de los límites previstos; al respecto cabe señalar que la tasa de inflación prevista para todo 1975 (20 o/o) fue superada ya por el incremento de precios de los 8 primeros meses, que alcanzó a 20,9 o/o (El Comercio, 2 de octubre de 1975, p. 4). Por otro lado, la fijación de topes salariales en las negociaciones colectivas torna visible la intención del Estado de encuadrar más rígidamente las reivindicaciones sindicales.

A nivel más general, esta reorientación de la política económica reafirma la tendencia básica del régimen actual: la construcción de un capitalismo de Estado asociado al capital imperialista como eje de la acumulación. En efecto, el sector estatal actúa como regulador de la economía, fijando políticas de precios y salarios que comprimen al consumo y favorecen a las ganancias estatales y privadas. De esta manera se intenta concentrar los recursos en la implementación de los grandes proyectos de inversión que materializan la alianza entre el capital estatal y el capital imperialista. Como se ha señalado, estas medidas buscan restablecer la tasa de ganancia de la empresa privada, afectada por la crisis, en beneficio especialmente de la burguesía monopólica nativa que se incorpora de modo subordinado al eje central de la acumulación.

De ahí el creciente endurecimiento del gobierno frente a las presiones salariales y redistributivas de los sectores populares, enfrentándolas con una reaccionaria ideología productivista. Se intenta así descargar las consecuencias de la crisis sobre los sectores populares, afectando especialmente a los grupos de reducida capacidad de organización y reivindicación como el campesinado medio y pobre, los trabajadores independientes subempleados, así como a la pequeña burguesía débilmente articulada. Al mismo tiempo, se preservan reducidos márgenes de negociación frente a los sectores con mayor capacidad reivindicativa, como en el caso de los trabajadores fuertemente organizados. De esta manera, se busca diferenciar la situación de los sectores populares e impedir una convergencia en sus movilizaciones que ponga en peligro la estrategia económica adoptada.

El régimen pretende que con las medidas adoptadas se generará una fuerte reactivación de la economía en el segundo semestre de 1975, alcanzándose una tasa de expansión del PBI del 8,5 o/o, que permitirá registrar un crecimiento del 5,5 o/o para el conjunto del año. Sin embargo, es probable que esta optimista estimación no se cumpla. En primera instancia, la gravedad de la crisis agrícola, y su carácter estructural, impedirá que los estímulos concedidos (aumento de los precios de los alimentos, baja de los fertilizantes y mayor apoyo crediticio) se traduzcan en el corto plazo en un significativo aumento de la producción, tal como lo descuenta el gobierno que prevé una tasa de expansión del sector del 10 o/o en el segundo semestre de 1975.

En segundo lugar, el estrangulamiento externo puede agravarse por el recrudecimiento de la inflación

internacional (aumentos del petróleo, de los insumos y bienes de capital), el estancamiento de las cotizaciones y demanda de la producción exportable y las crecientes dificultades que experimenta el país para captar la masa de financiamiento internacional necesario para cerrar la brecha externa, especialmente si se toma en cuenta el muy alto nivel, y la defectuosa estructura, del endeudamiento externo del Perú. Asimismo, la estrategia del régimen supone una fuerte recuperación de la economía internacional, que en caso de operarse más débil y lentamente o de abortar agravaría significativamente las dificultades económicas. De ahí que pueda ser necesario controlar aún más severamente la evolución de las importaciones, con el consiguiente efecto negativo sobre el nivel de la actividad económica interna.

En tercera instancia, la aceleración de las presiones inflacionarias debilitará la demanda, incrementando las dificultades de realización, al erosionar el poder de compra de los sectores populares. Por último, la recuperación prevista en la construcción, del orden del 19,5 o/o en el II semestre de 1975 (cf. La Crónica, 27 de setiembre de 1975, p. 3), chocará no sólo con la lentitud en la implementación de los proyectos de inversión pública y con los problemas derivados del encuadramiento del crédito sino que además será obstaculizada por la limitación de la capacidad instalada en la industria básica (cemento, acero, etc.), generando escasez y encarecimiento de los insumos de la construcción.

De ahí es probable que tengan que adoptarse nuevas medidas de política económica frente al deterioro de la coyuntura, al incremento de las presiones salariales e inflacionarias y a la profundización del estrangulamiento externo.

En el corto plazo la economía peruana, enfrenta un complejo panorama por efecto de la crisis interna e internacional. Se hará necesario restringir con mayor energía el consumo y las importaciones en el contexto de crecientes reivindicaciones salariales y redistributivas de los sectores populares, afectados fuertemente por la degradación del empleo y del poder adquisitivo de las remuneraciones.

La acumulación de estas dificultades erosionarían notablemente la capacidad de regulación estatal de la economía, tornando al régimen aún más dependiente de su asociación con el capital imperialista y profundizando la lucha para determinar qué clases pagan los costos de la crisis.

4. PERSPECTIVAS

La superación de la actual crisis está ligada al restablecimiento de la tasa de ganancia, que requiere el reordenamiento de las bases de la expansión, vía la desvalorización de capital, y el incremento de la tasa de plusvalía. Lo primero se lograría vía la eliminación de las empresas menos productivas, la reducción del capital ficticio y especulativo y la concentración de los recursos en las implantaciones más rentables. Lo segundo se conseguiría a través del aumento de la

explotación de los trabajadores, conteniendo sus presiones salariales y redistributivas y elevando la productividad gracias a la racionalización e intensificación del trabajo.

De ahí que la recuperación de la economía peruana dependa de tres factores, que permitan restablecer la tasa de ganancia e iniciar un nuevo ciclo de expansión.

En primera instancia, de la maduración, en 1977-78, de los grandes proyectos mineros, petroleros, industriales y de infraestructura emprendidos en el marco de la alianza entre el capital estatal y el capital imperialista. Estos proyectos ampliarán significativamente la producción de excedente, impulsando la rentabilidad del capital, al mismo tiempo que elevarán la capacidad de exportación y reforzarán el circuito económico interno. Sin embargo, la magnitud de esta ampliación depende de la riqueza de los yacimientos petroleros amazónicos que puedan explotarse; permitiendo así la capitalización de una renta minera más o menos importante. De hecho, en los últimos meses ha ido disminuyendo el marcado optimismo oficial al respecto.

En segundo lugar, la recuperación de la economía peruana está en gran medida condicionada al restablecimiento de la economía mundial capitalista. En el corto plazo, este restablecimiento permitiría elevar la rentabilidad del sector exportador (aumentando el volumen y las cotizaciones de las materias primas), limitando las transferencias de excedente a las metrópolis capitalistas, al mismo tiempo que aliviaría el déficit de la balanza de pagos y facilitaría la captación de un nuevo endeudamiento externo. De este modo, se podría mantener la capacidad de importación. A mediano y largo plazo, la recuperación de la economía internacional haría posible el desarrollo de los planes de acumulación oficiales que, como se ha señalado, asumen un carácter complementario y subordinado a la expansión capitalista internacional. Por estas razones, un estancamiento o una recuperación frágil y pasajera de la economía mundial capitalista agravaría significativamente las dificultades económicas del régimen a corto y largo plazo, tornando utópicos sus planes de desarrollo actuales.

En tercera instancia, el restablecimiento de la economía peruana está ligado a la evolución de la lucha de clases interna, que determinará la posibilidad de contener las presiones salariales y redistributivas de los sectores populares y de intensificar la explotación de los trabajadores, para restablecer la tasa de plusvalía y elevar las ganancias. De ahí el endurecimiento de la política laboral y salarial del régimen, dirigida a descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores para defender la rentabilidad del capital privado y estatal.

Debe agregarse que la expansión futura de la economía nacional se encuentra recortada por el muy alto nivel del endeudamiento externo, cuyos plazos de vencimiento se acumulan en los próximos años, que generará una masiva transferencia de excedente a los centros capitalistas, ocasionando al mismo tiempo un fuerte drenaje en la balanza de pagos.

La profundidad y duración de la crisis, así como la intensidad y orientación que vayan asumiendo los enfrentamientos entre las clases, determinan la aparición de una tensión, con mayor o menor intensidad, en el seno del bloque en el poder sobre la modalidad de

consolidar el capitalismo de Estado asociado al capital imperialista.

En ese sentido se perfilan dos proyectos, que pueden combinarse en diversas medidas.

Por un lado, la construcción del sector estatal con una mayor amplitud y velocidad, articulando diferentes formas de empresas (como las cooperativas, las empresas de propiedad social y las empresas públicas) bajo el control del Estado. Este proyecto conllevaría una negociación más enérgica con el capital imperialista para la repartición del excedente generado, restringiendo igualmente sus campos de inversión y las posibilidades de desarrollo de la burguesía nativa. El capital estatal se integraría vía la tecnología, el financiamiento y la internacionalización de la producción al circuito mundial del capital imperialista, modificándolo, pero sin cancelar, su situación de dependencia y subordinación. Al mismo tiempo, se intentaría integrar a los trabajadores a este proyecto, organizando una alianza de clases, controlada corporativamente desde el Estado, sobre la base del apoyo de la pequeña burguesía rural y urbana y de la clase obrera al avance del capital estatal, que se enmascararía como el representante del "interés general de la nación", cristalizando la ideología de la construcción de un socialismo "participacionista, humanista y cristiano".

Por otro lado, una consolidación más lenta y progresiva del sector estatal que desarrolle una asociación más orgánica y amplia con la burguesía imperialista y monopólica nativa, ampliando sus campos de inversión.

La autonomía relativa del capital estatal sería más limitada, eliminándose paulatinamente las expresiones ideológicas utópicas derivadas de la presencia de la pequeña burguesía en las primeras fases de la construcción del sector estatal. Alrededor de la asociación entre el capital estatal y el capital imperialista se integraría subordinadamente al resto de la burguesía, especialmente a sus estratos monopólicos. Se intentaría establecer una base social a este proyecto estructurando el apoyo de los sectores medios y procurando controlar corporativamente a los trabajadores, en la búsqueda de asegurar su segmentarización y desmovilización.

En todo caso, la crisis actual plantea la urgencia de defender los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores frente a la política del régimen, que está dirigida a descargar sobre los sectores populares las consecuencias de las dificultades económicas del capital privado y estatal y a someterlos a un control político corporativo. De ahí la orientación del gobierno hacia la ilegalización de las huelgas, el establecimiento de toques salariales (que hacen avisorar la perspectiva de un congelamiento de las remuneraciones), los reclamos oficiales para elevar la producción y productividad en beneficio del capital y las trabas impuestas al desarrollo de la autonomía sindical y política de los trabajadores.

Octubre de 1975.

**SOCIEDAD
Y POLÍTICA**

Las Luchas Sectoriales :

El SUTEP y la política educativa del Régimen

desde 1971 las luchas y movilizaciones del magisterio nacional, aglutinado en su máximo organismo sindical el SUTEP, han desempeñado un papel de primera importancia en el desarrollo del clasismo dentro de los trabajadores del país. Estas luchas no sólo han contribuido al esclarecimiento de la real naturaleza de clase del régimen y a la resistencia a su ofensiva corporativa, sino que han impulsado decisivamente la elevación del nivel de conciencia y organización del magisterio y los sectores populares.

Testimonia este hecho la permanente preocupación del régimen, a través de sus voceros y de la prensa "socializada", por desnaturalizar estas movilizaciones y neutralizar al SUTEP. Con este fin el gobierno ha utilizado tanto la represión sobre las bases y la dirigencia del magisterio, como el diálogo y la prédica ideológica.

De ahí la importancia de examinar la lucha de clases en el terreno de la educación, analizando las orientaciones principales de la política del régimen en el sector y las luchas de los trabajadores en la educación.

LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL RÉGIMEN

En 1975 el régimen ha proseguido con la implementación de la reforma de la educación (ver para un análisis de esta reforma el artículo de César Germaná "La Política Educativa del Régimen Militar", Sociedad y Política, No. 1, p. 42-47), transformando el contenido de la enseñanza, y modificando la organización del aparato educativo.

Dentro de esta implementación han asumido la mayor importancia dos orientaciones: la racionalización del gasto en la educación y el intento de establecer un control político corporativo sobre el magisterio.

LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO ESTATAL EN LA EDUCACIÓN

La crisis económica interna e internacional, consecuencia de la naturaleza capitalista dependiente de nuestra sociedad, ha conducido al Gobierno a concentrar todos los recursos económicos en la implementación de los grandes planes de inversión que realiza en asociación con el capital imperialista.

Estos recursos se han obtenido a través de la compresión de los salarios, por efecto del incesante alza del costo de vida, de la reducción del empleo y de las grandes economías que ha realizado el Estado al limitar drásticamente sus gastos en educación, salud y

vivienda popular, dejando sin atender las grandes necesidades de los trabajadores del país. De esta manera, los sectores populares han debido costear las consecuencias de la crisis en beneficio de las ganancias del capital estatal y privado.

En la educación esta limitación o racionalización del gasto estatal se ha manifestado de múltiples formas. Por un lado, se ha recortado el presupuesto educativo, disminuyendo su participación en los gastos totales del 23.3 o/o en 1968 al 18 o/o en 1975 (ver BCR "El Desarrollo Económico y Financiero del Perú 1968-73" y El Comercio, 4 de enero de 1975). Asimismo, se han aumentado el tamaño de las clases con el fin de ahorrar la contratación de nuevos docentes, intentándose igualmente prolongar la jornada de trabajo de los profesores. Al mismo tiempo, no se ha procedido a la refacción de los locales escolares (especialmente a los dañados por el sismo último) y se han limitado las construcciones, con el lógico resultado de congestionar en 3 y 4 turnos diarios las precarias instalaciones existentes. De la misma manera, se ha intentado ahorrar los fondos públicos estimulando la participación de la comunidad en el sostenimiento de las escuelas vía la construcción de locales, la adquisición de material didáctico, etc., sin que el Estado contribuya con un esfuerzo correspondiente.

Por otro lado, se ha limitado el gasto estatal en la educación generalizando el empleo de docentes contratados, que hoy suman más de 30,000 en el país, y perciben remuneraciones inferiores a los nombrados por la realización del mismo trabajo, no gozan de derecho a vacaciones ni cuentan con seguro social y están sometidos a una permanente inestabilidad laboral, por la renovación de sus contratos que muchas veces es utilizada por las autoridades educativas para neutralizar su participación en el SUTEP y estimular su incorporación al sindicato oficialista, el SERP. Asimismo, el Estado ha economizado recursos desatendiendo las justas reivindicaciones económicas, y profesionales del magisterio nacional.

Esta racionalización del gasto estatal en la educación ha contribuido, en consecuencia, al deterioro de las condiciones pedagógicas de los escolares del país, tornando aún más precarias las condiciones de vida y trabajo del magisterio. Al mismo tiempo, ha significado que han permanecido sin solución la marginación de la escuela de grandes grupos de la niñez y juventud popular, así como el problema del analfabetismo, ya que no se han ampliado significativamente las oportunidades educacionales.

LA OFENSIVA CORPORATIVA DEL REGIMEN EN EL MAGISTERIO

El gobierno intenta controlar corporativamente a los trabajadores en la educación para convertirlos en agentes transmisores de su ideología, contener sus reivindicaciones económicas y profesionales y crearse una base social de apoyo en el magisterio.

Con el fin de alcanzar el primer objetivo el gobierno ha establecido el reentrenamiento docente y una

serie de cursillos y seminarios sobre la problemática educativa. En estos eventos se difunde machaconamente la ideología de la "Revolución Peruana", desfigurando y atacando los planteamientos de los trabajadores, y forzando al magisterio a la asimilación de esas bases ideológicas. Sin embargo, esta tentativa de adoctrinamiento ha generado el descontento y la resistencia de los maestros, que reivindican la libertad de expresión y crítica para cuestionar los planteamientos oficiales y proponer sus propias alternativas.

Para contener las reivindicaciones económicas y profesionales del magisterio el régimen ha recurrido a la ilegalización de su legítima organización sindical, el SUTEP. Al mismo tiempo, practica una política de intransigencia frente a los reclamos y exigencias de los maestros clasistas, soñtiéndolos a una serie de medidas de disciplina y represión como los juicios, subrogaciones, traslados arbitrarios, etc.

Por último, para crearse una base de apoyo en el magisterio el gobierno estableció un sindicato oficialista, el SERP, a fines de 1973, aprovechando la prisión y subrogación de los dirigentes más combativos del SUTEP. El SERP cuenta con todo el apoyo de la maquinaria oficial: goza de los favores de la burocracia del Ministerio de Educación y es ampliamente promovido por los medios de comunicación controlados por el régimen. El SERP intenta dotarse de una base de masas y competir con el SUTEP sobre la base de la repartición de prebendas como nombramientos, traslados, ascensos, etc.

La ofensiva corporativa del régimen se ha estrellado con la resistencia de los trabajadores de la educación, determinando que pese a todos los apoyos y estímulos oficiales el SERP solo hay recogido la adhesión de un reducidísimo sector del magisterio, como se demostró en las últimas elecciones de las cooperativas magisteriales. La estruendosa derrota de esta organización hizo inocultable su fracaso, quedando como única alternativa a los voceros oficiales el tratar de minimizar los resultados del escrutinio.

LAS LUCHAS DEL SUTEP

Frente a la imposibilidad de desplazar al SUTEP a través de la represión o de la competencia del SERP el régimen optó en 1975 por la neutralización política y reivindicativa del magisterio. Con este fin otorgó un aumento en enero, que favorecía sobre todo a los docentes de mayor antigüedad y discriminaba a los más jóvenes, para agrietar así su cohesión y erosionar su capacidad de movilización unitaria. Al mismo tiempo, el gobierno desarrolló toda una campaña en la prensa "socializada" dirigida a distanciar a la dirigen-

**SOCIEDAD
Y POLITICA**

cia del SUTEP de sus bases, acusándola de responder a "oscuras consignas políticas". Cuando por efecto del alza de precios, causada por la crisis, comenzaban a intensificarse las reivindicaciones económicas del magisterio el régimen se vio forzado a conceder en junio un aumento de 1,660 soles, continuando con su estrategia de neutralización de las movilizaciones de los trabajadores en la educación.

Asimismo, como parte de esta política se amplió la represión administrativa sobre los dirigentes del SUTEP, confiando el gobierno con el éxito de su intento de neutralización de las bases. De esta manera, se multiplicaron los obstáculos enfrentados por los dirigentes sutistas con el fin de trabar su capacidad de movilización. Las autoridades recurrieron a las amonestaciones, las subrogaciones, los traslados, las reorganizaciones de plantel, las prohibiciones de reunión de asambleas del magisterio, etc., para implementar este objetivo. Solo el apoyo y movilización decididas de los trabajadores en la educación ha permitido proteger a sus dirigentes de estas arbitrariedades, frenando la represión administrativa de las autoridades.

DEL CONGRESO NACIONAL DE TRUJILLO AL PARO NACIONAL DEL 28 DE AGOSTO

En enero de 1975 se realizó en Trujillo el Congreso del SUTEP, donde se renovó la dirigencia, se estableció el pliego de reclamos y se delineó la estrategia para luchar por las reivindicaciones magisteriales en 1975.

Este congreso constituyó una etapa más en el desarrollo del nivel de organización y conciencia de los trabajadores en la educación. Sin embargo, en ese mismo evento se hicieron presentes algunos problemas que traban la plena consolidación y fortalecimiento del SUTEP. Se trata, en lo fundamental, del aún insuficiente trabajo en las bases, que no promueve su activa participación y fomenta la aparición de actitudes burocráticas por parte de la dirigencia nacional. La consecuencia de esta situación es el desarrollo de tendencias sectarias, que traban la incorporación de las demás corrientes clasistas a las luchas y movilizaciones del SUTEP, impidiendo la materialización eficaz del frente único sindical. Por otro lado, el desarrollo de posiciones diferenciadas al interior mismo de la dirigencia nacional tornó más difícil la tarea de delinear un programa de lucha y un plan de organización que permitan la consolidación y el fortalecimiento del SUTEP.

De esta manera, si bien el SUTEP concita la adhesión de la vasta mayoría de los maestros, como se ha demostrado durante tres años consecutivos en las elecciones de la cooperativa magisterial, su capacidad de movilización e iniciativa se ve limitada por los factores señalados. Es decir, se encuentra en dificultades para traducir plenamente esta adhesión en iniciativas y movilizaciones, que cuenten con un masivo respaldo de las bases.

Desde fines de marzo las bases del SUTEP enarbolan la lucha por la estabilidad laboral de los docen-

tes contratados, amenazados por la racionalización del gasto estatal en la educación. A través de la movilización y la constitución de un Frente de Contratados se logró la renovación de los contratos y la creación de 2000 nombramientos para el siguiente año escolar.

Por otra parte, el SUTEP realizó una movilización nacional el 15 de mayo para presentar el pliego de reclamos y exigir solución a los problemas más urgentes que aquejan al magisterio. Las autoridades se negaron a tratar estas reivindicaciones, mostrando una actitud intransigente. Asimismo, el 24 de junio se llevó a cabo una movilización nacional para "rechazar la demagogia del gobierno a través de la reforma agraria y la CNA". Influyó negativamente en estas movilizaciones el clima de represión imperante con la suspensión de garantías vigente en esos momentos, la ilegalización y detención de los manifestantes, la negativa de la prensa "socializada" a publicar los comunicados y su afán de desnaturalizar estas movilizaciones y amedrentar a las bases. Al mismo tiempo, los problemas que hemos mencionado (falta de trabajo de bases, sectarismo, diferenciación interna, etc) tornaron imposible contrarrestar eficazmente esta situación logrando la movilización del magisterio alrededor de sus reivindicaciones más sentidas.

Aprovechando la tardanza en establecer las listas de los candidatos del SUTEP a la cooperativa magisterial, consecuencia de la diferenciación interna de la dirigencia nacional, el SINAMOS postergó la fecha de las elecciones para el 20 de julio, con el fin de ganar tiempo y postergar las luchas del magisterio por sus reivindicaciones económicas y profesionales. Asimismo, con la clara intención de favorecer al SERP dictó una disposición que otorgaba una representación desmesurada a las minorías en los órganos de gobierno de la cooperativa.

En la campaña misma el régimen intentó por todos los medios debilitar la posición del SUTEP vía una intensa campaña de prensa, negándose a dar facilidades para la realización de asambleas explicativas de la cooperativa, impidiendo y trabando el trabajo de propaganda y movilización de las bases del SUTEP. Por su parte, se otorgaban todo género de facilidades y propaganda a los candidatos promocionados por el SERP.

A pesar de toda esta campaña los trabajadores en la educación reafirmaron su respaldo al SUTEP, que obtuvo el 91 o/o de los votos. La decidida y unánime actitud de las bases determinó el fracaso de los intentos de intervención del SINAMOS en la cooperativa, así como de la ofensiva corporativa del SERP.

El 6 de agosto el gobierno dispuso la deportación de un numeroso grupo de dirigentes sindicales y de luchadores sociales, entre los cuales se encontraban tres de los máximos dirigentes del SUTEP. El objetivo de estas medidas era el descabezamiento de las más importantes organizaciones clasistas con la finalidad de quebrar su resistencia frente a la ofensiva corporativa del régimen y contener las reivindicaciones de los trabajadores, afectados por el creciente desempleo y alza de precios.

Esta medida provocó el unánime repudio de las bases, que se manifestó en la movilización nacional de protesta del 15 de agosto, a pesar de la represión oficial. Asimismo, se programó con este mismo fin un

paro nacional el 28 de agosto. Esta iniciativa dio lugar a una serie de detenciones de maestros, así como a la creación de toda una atmósfera amenazante en las escuelas. En efecto, las autoridades desarrollaron toda una campaña de amedrentamiento frente a las bases sutistas impidiendo la realización de asambleas de los docentes, realizando inspectorías sorpresivas, circulando oficios intimidatorios. Al mismo tiempo, se desató una campaña en la prensa "socializada" y se generaron una serie de rumores alarmistas en el magisterio. Estas tareas fueron complementadas por el despliegue de un importante dispositivo policial en los locales escolares el día del paro.

A pesar de todos estos factores, los maestros expresaron su protesta mayoritaria el 28 de agosto frente a la política represiva del régimen, confluyendo con las movilizaciones de otros sectores de trabajadores clasistas coordinadas por el CCUSC.

NOTAS FINALES

El SUTEP enfrenta hoy la tarea de consolidar su organización y promover el nivel de conciencia del magisterio, sobre la base de la experiencia y los logros acumulados en 4 años de incesante lucha.

El cumplimiento de esta tarea exige articular el mayoritario respaldo del magisterio al SUTEP en un eficaz trabajo de bases, que refuerce a la organización en sus diferentes niveles e impulse la educación clasista de sus miembros. De esta manera se podrán superar los rasgos burocráticos todavía presentes en la vida sindical.

La materialización de este trabajo de bases podrá operarse solo si se promueve y alienta la participación de todas las corrientes clasistas, fortaleciendo el frente único sindical. De esta manera, se lograría la superación del sectarismo y de la diferenciación interna de la dirigencia nacional mediante el diálogo y la crítica, única vía para canalizar la discusión en dirección de la meta fundamental: el fortalecimiento del SUTEP.

De este modo se estructuraría un programa y plan de lucha, que sintetice las reivindicaciones más sentidas del magisterio nacional, orientando eficazmente sus luchas y movilizaciones. Las principales reivindicaciones de los trabajadores en la educación se centran en tres puntos:

1. La lucha por el reconocimiento legal del SUTEP, única organización representativa del magisterio, como parte del combate más amplio por las libertades democráticas de los trabajadores y por su defensa frente a la ofensiva corporativa del régimen. Es decir, se conquistará el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de organización sindical, contrastándose eficazmente la represión administrativa y la manipulación de las autoridades (prohibiciones a las reuniones de los maestros sutistas, traslados arbitrarios, subrogaciones por pertenecer al SUTEP, etc.). De esta manera, se enfrentaría la táctica de neutralización y desmovilización implementada por el Gobierno en el sector educación, desarrollándose mayores movilizaciones para conquistar la materialización de las reivindicaciones económicas y profesionales del magisterio.

2. El combate por lograr mejores condiciones materiales y pedagógicas para la educación popular, enmarcado dentro de una crítica a las concepciones de la reforma de la educación que permita ir cristalizando las líneas de una alternativa que represente los intereses de los trabajadores en el sector educativo. La racionalización del gasto estatal en la educación, como se ha visto, ha deteriorado fuertemente las bases de la educación popular, agudizando los problemas de la inadecuación y escases de locales escolares, de la falta de material didáctico, de la marginación de gruesos sectores de la niñez y juventud de la escuela, etc. Esta situación ha generado importantes luchas y movilizaciones.

3. La lucha por la estabilidad laboral de los docentes contratados, sometidos a precarias condiciones de trabajo y salarios que los transforman en víctimas de la arbitrariedad de las autoridades educativas e impiden su plena participación en la educación popular, así como su calificación y perfeccionamiento profesional. Solo el nombramiento inmediato de los contratados podrá solucionar estos problemas.

Por este camino, se lograría avanzar hacia la meta prioritaria, que en la actualidad se resume en la conquista de mejores condiciones de lucha, como paso indispensable para consolidar al SUTEP y permitir el logro de las reivindicaciones de los trabajadores en la educación, enmarcadas dentro de las luchas y movilizaciones de los sectores populares con la perspectiva de la construcción de una sociedad socialista, única vía capaz de asegurar una solución integral a los problemas de los trabajadores.

LOS TRABAJADORES FRENTE AL CAPITAL

En setiembre de 1973, es decir hace más de dos años, en el No. 4 de esta revista se publicó una nota de solidaridad con los cc. trabajadores despedidos de Sider-Perú y Paramonga, en la que decíamos "La movilización de los trabajadores en defensa de los presos y despedidos de Sider y Paramonga no sólo debe hacerse como un acto de solidaridad clasista, sino también como una medida de auto defensa". Preventamos así a los trabajadores contra lo que a primera vista podría tomarse como una medida aislada y producto de una situación especial en estos centros de trabajo, pero que en realidad era el primer brote de una política antilaboral que se confirmaría y repetiría conforme los trabajadores se resistieran tanto a la conciliación de clases, como a una intensificación de la explotación capitalista.

De 1973 a 1975 nuevos contingentes de trabajadores han sido despedidos y encarcelados. Y aún los trabajadores de Sider y Paramonga continúan su lucha por volver a sus centros de trabajo. Los obreros de Paramonga acaban de terminar una huelga de hambre de 1 mes de duración que no los ha devuelto a su centro de trabajo de rigor, sino que han obtenido la promesa de ubicarlos en una nueva empresa de Propiedad Social.

Que las movilizaciones de los obreros en esos centros de trabajo no eran artificiales ni producto de manipulaciones extra sindicales, lo confirma el hecho terminante de que no hay una sola rama de la producción que no se vea afectada por la ofensiva del capital, que busca obtener un margen cada vez mayor de ganancias a costa de los trabajadores, y que intenta ponerse a cubierto de la crisis capitalista reduciendo los salarios, haciendo cada vez más duras las condiciones de trabajo, despidiendo a los obreros, creando normas y tasas de producción imposibles de cumplir, acosando a la organización sindical y atacando el derecho de huelga. Todos estos problemas son de conocimiento público a través de los comunicados sindicales que en estos dos años se han logrado publicar y de los paros y huelgas a que se han visto empujados los trabajadores. Textiles, confecciones, mineros, Baja Policía, metalúrgicos, etc. han sufrido una y otra vez la ofensiva del capital.

Pero las movilizaciones de los trabajadores no rescatan sólo sus reivindicaciones salariales y su derecho a la estabilidad en trabajo. Recuperan también, y éste es un hecho que es necesario rescatar, la autonomía política de la clase frente al capital y al intento de incorporarlos a organizaciones bajo control oficial. La lucha contra SINAMOS y el M.L.R. son claras muestras de esta resistencia. Resistencia que hasta hoy ha hecho imposible la regimentación del movimiento laboral peruano. No es por ultrismo que los trabajadores peruanos se movilizan. Es simple y llanamente porque el "Modelo Peruano" no expresa los intereses de los trabajadores y porque el resultado de las reformas permite, como indicó en CADE 75 el ministro de Economía que "muchos de los empresarios que hoy objetan las Reformas estructurales y las comunidades laborales, se han visto beneficiados por la ampliación del mercado" y que a pesar de ello las inversiones que deberían dinamizar la Economía no han seguido el mismo ritmo. Según el Banco Central de Reserva (Cuentas Nacionales 1960-1973) las utilidades pasaron de 1968 a 1974 de 33,774 a 85,858 (en millones de soles corrientes) mientras que la inversión fue de 16,992 a sólo 33,533 en el mismo período. Es, pues, explicable, normal y justa la resistencia de los trabajadores a seguir alimentando esta voracidad capitalista. Exigir en este marco recortar las reclamaciones para levantar la productividad no significa otra cosa que plantear a los trabajadores que sostengan y desarrollen los intereses de clase del capital.

La situación descrita en esta Nota se encuentra expuesta y reiterada por los propios trabajadores en sus denuncias y comunicados, de los cuales presentamos algunos párrafos ilustrativos. No son en absoluto todos, pero sí los más importantes de ellos.

... Los hechos han demostrado que los trabajadores nos hemos encontrado ante una Empresa que se dice de los trabajadores pero que básicamente funciona con criterios capitalistas, organización y control de la producción, criterios de rentabilidad, etc. En ese primer momento el Estado se mostró como árbitro parcializado del conflicto, apareciendo como mediador entre los trabajadores y la Empresa, beneficiando con la dilación en la solución de nuestro Pliego. ...

... El hecho de que nuestra huelga haya sido suspendida indefinidamente y no levantada como la prensa corporativizada quiere hacer creer, significa que proseguimos con nuestras banderas de lucha en alto. Así, nuestras condiciones inhumanas e inhumanas de trabajo no han sido ni tocadas, están pendientes nuestras exigencias de cumplimiento de Convenios Colectivos, discusión de memoriales únicos; del mismo modo, exigimos el retiro de los funcionarios provocadores, los cuales son inclusive premiados con becas al extranjero. No olvidamos tampoco a nuestros cuatro hermanos mineros muertos en el lapso de una semana en Cerro de Pasco, de cuyos responsables exigimos su retiro de la empresa, etc. Nuestro combate continuará bajo nuevas formas, por el momento: movilizaciones, marchas, mítines, la propagandización de nuestros problemas y los de los demás sectores, la denuncia y desenmascaramiento de la política económica de un régimen que se declara humanista pero que descarga el peso de la crisis en los trabajadores, en el mismo momento en que se ponen toques a las reivindicaciones salariales y se ilegalizan en la práctica todas las huelgas.

... Todo ello deberá apuntar a un cada día mayor fortalecimiento de nuestra capacidad organizativa. Las próximas luchas no nos deben encontrar separados de nuestros compañeros de Toquepala, Cusajone, ni de la pequeña y mediana minería. Debemos dar pasos concretos para que un Congreso Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, sancione nuestra definitiva incorporación, así como la de otras bases clasistas del sector minero. ...

... Por lo tanto, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con los sindicatos actualmente en conflicto. Estamos por la reposición inmediata de todos los trabajadores despedidos, principalmente, los cc. de Paramonga que se encuentran más de 25 días en huelga de hambre junto con sus esposas; con los cc. despedidos de Toyota, Nissan y demás; nos solidarizamos con los cc. mineros de Arcata Bella Unión Acari; apoyamos a los trabajadores de Toquepala en sus justas reivindicaciones contra la empresa imperialista Southern Peru Cooper Co., que no son escuchados, mientras sí se escucha a los empresarios que piden, en el CADE de Trujillo, represión para los trabajadores en lujosas reuniones. Llamamos a todos los sindicatos en conflicto a participar en el CCUSC para el triunfo definitivo de nuestras luchas. Asimismo, estamos por el reconocimiento del SUTEP y la CCP., legítimos representantes de los maestros y campesinos. ...

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES CENTRÓMIN PERU - COMISIÓN DEL PLIEGO (Comunicado del 24 de octubre de 1975 en el Diario Expreso)

PLIEGO DE RECLAMOS: INTRANSIGENCIA PATRONAL HACE FRACASAR TRATO DIRECTO. La Empresa fiel a su política de rechazo y de burla a nuestras justas demandas se niega a solucionar el PLIEGO DE RECLAMOS, aduciendo descaradamente "incapacidad económica", ofreciéndonos un aumento y condiciones de trabajo inferiores a las logradas en nuestro pliego anterior. Para esto NATIONAL al igual que todas las empresas capitalistas se vale del anti obrero D.L. No. 21202, que reglamenta y fija un tope para nuestros aumentos salariales. Esto solo favorece a las empresas a quienes no se les impone ningún control sobre el precio de las mercancías, encareciendo el costo de vida de las masas populares. Pero sin embargo a nosotros se nos reglamenta cuánto debemos ganar, no se toman en cuenta las grandes utilidades que obtienen las empresas debido a su mayor acumulación de plusvalía. Esto nos recorta el poder adquisitivo sobre los artículos que son imprescindibles para nuestra subsistencia, y se pretende reglamentar nuestras luchas para elevar nuestro miserable nivel socioeconómico. ¡Demandamos la inmediata derogatoria de este Patronal D.L. No. 21202! ...

... Esta agresión no sólo se da en nuestra base, sino que es parte de toda una ofensiva por parte del imperialismo, la burguesía y los sectores más reaccionarios de nuestro país. Frente a esto el proletariado debe ir fortaleciendo sus organizaciones independientes de clase, como alternativa para nuestras luchas mediatas e inmediatas. Es en esta perspectiva que nuestra base EXIGE A LA DIRECTIVA DE LA FETIMP, así como a todas las bases a impulsar el PARO METALURGICO acordado para los días 11 - 12 de noviembre. EXIGIMOS EL PRONUNCIAMIENTO DE NUESTRA CENTRAL CGTP.

Rechazamos la Reglamentación que se pretende dar a los plazos de HUELGA, valiéndose de una "Resolución" del año 1913, cuando ni siquiera existía la jornada de 8 horas. Esta es una medida antiobrero, patronal y leguleya que atenta contra el derecho de HUELGA, que al igual que la jornada de 8 horas, ha sido ganada con la sangre del proletariado. ...

SINDICATO OBRERO DE LA FABRICA NACIONAL PERUANA (Comunicado del 13 de octubre de 1975 en el diario Expreso)

... FORMEMOS UN PODEROSO "COMITE DE DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS".

El 9 de los corrientes, el Ministerio de Trabajo publica un cavernario comunicado, destruyendo prácticamente el derecho de huelga, lo que tiene que ponernos en estado de alerta y movilización general. Por otra parte, estamos viendo que todas las huelgas son declaradas ilegales, facultando a la patronal despedir masivamente a los trabajadores que apelan al ejercicio de este derecho. ¿A dónde van las Autoridades por esta pendiente y con esta lógica? Si todos los trabajadores tienen derecho a recurrir a la huelga y si, a su vez, todas éstas son declaradas ilegales con despido masivo, es decir, con despido de todos los trabajadores, ¿quiénes se quedarán entonces en las fábricas? ¿Han reflexionado las Autoridades sobre este absurdo?

Y si a estas medidas, agregamos el hecho de que todos los que luchan en defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora están siendo encarcelados, como es el caso del c. Julio Romero y centenares de presos más; y con el agravante de que los despidos de dirigentes y trabajadores están siendo legalizados por la Autoridad de Trabajo.

Todas estas medidas que ponen en peligro los derechos más elementales del pueblo trabajador, tienen que obligarnos a darnos la organización más efectiva para defender nuestros derechos democráticos. Y no en forma puramente declarativa sino verdadera y efectiva.

Por estas razones planteamos la formación inmediata de un poderoso COMITE DE DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS, que tenga por objetivos puntos concretos e indiscutibles:

- 1.- Por el pleno ejercicio del derecho de huelga, contra las ilegalizaciones.
- 2) Por la libertad de todos los presos sindicales, estudiantiles, políticos de izquierda, etc.
- 3.- Por la reposición de todos los trabajadores despedidos, sin excepción.
- 4.- Por la legalización de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas de izquierda.
- 5.- Por el derecho irrestricto de reunión y de prensa.

A este Comité deben integrarse todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, políticas de izquierda, culturales, etc. Este será el organismo amplio y masivo que sirva para frenar la represión contra el pueblo, para impedir quedesaparezca el derecho de huelga, para sacar a nuestros presos de las cárceles y reponer a nuestros despedidos en sus puestos habituales de trabajo. ...

SINDICATO TEXTIL HILOS CADENA LLAVE. (Comunicado del 14 de octubre de 1975 en el diario Expreso).

¡SOLIDARIDAD CON LA RESISTENCIA ESPAÑOLA!



¡Porque en España matan, otros matan
al niño, a su juguete que se para,
a la madre Rosenda esplendorosa,
al viejo Adán que hablaba en voz alta con su caballo
y al perro que dormía en la escalera,
Matan al libro, tiran a sus verbos auxiliares,
a su indefensa página primera!
Matan el caso exacto de la estatua,
al sabio, a su bastón, a su colega,
al barbero de al lado — me cortó posiblemente,
pero buen hombre y, luego infortunado;
al mendigo que ayer cantaba enfrente,
a la enfermera que hoy pasó llorando,
al sacerdote a cuestras con la altura tenaz de sus rodillas.